

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420
	TARIFA REDUCIDA Concesión N° 3146

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

46ª REUNIÓN — 22ª SESIÓN ORDINARIA (Continuación) — 28 DE NOVIEMBRE DE 1991

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**,

y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor **LUIS A. J. BRASESCO**

Secretario: señor **HUGO RAÚL FLOMBAUM**

Prosecretarios: señores **MARIO DÉLFOR FASSI** y **DONALDO ANTONIO DIB**

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan Ramón
AMOEDO, Julio A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
CONCHEZ, Pedro A.
COSTANZO, Remo José
GASS, Adolfo
GROSSO, Edgardo Roger M.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LAFFERRIERE, Ricardo E.
LEÓN, Luis Agustín
LUDUEÑA, Felipe
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARÍN, Rubén Hugo
MENEM, Eduardo
MOLINA, Pedro E.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
POSLEMAN, Eduardo A.
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.

SAADI de DENTONE, Alicia
SAMUDIO GODOY, Wilfrido
SÁNCHEZ, Libardo N.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
TRILLA, Juan
VACA, Eduardo P.

EN COMISION:

BRAVO HERRERA, Horacio F.
GURDULICH de CORREA, Liliana
MAZZUCCO, Faustino M.
RUBEO, Luis A.

LICENCIA, POR ENFERMEDAD:

BRITOS, Oraldo N.

AUSENTES, CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
FIGUEROA, José Oscar
GENOUD, José
JUAREZ, Carlos A.
LOSADA, Mario Aníbal
MAC KARTHY, César
SAPAG, Elías
STORANI, Conrado
VELÁZQUEZ, Héctor

SUMARIO

1. **Manifestaciones de la señora senadora Malharro de Torres** respecto de la presencia de docentes en el Honorable Senado. (Pág. 4518.)
2. **Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios** en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre organización del Poder Judicial de la Nación para la implantación del procedimiento penal oral. (P.E.-315/91.) Se aprueba. (Página 4518.)
3. **Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas** en el proyecto de comunicación del señor senador Conchez por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga las medidas necesarias para dotar al acceso marítimo del puerto de Quequén de la profundidad que permita la salida de buques tipo "Panamax". (S.-990/91.) Se aprueba. (Pág. 4528.)
4. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Educación, de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Rivas y del señor senador Romero Feris sobre transferencia de servicios educativos nacionales. (S.-832/91.) Se aprueba con modificaciones. (Pág. 4530.)
5. **Apéndice:**
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 4558.)
 - II. Inserciones. (Pág. 4561.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 19 del jueves 28 de noviembre de 1991.

1

MANIFESTACIONES

Sra. Malharro de Torres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Hago notar que se encuentran en la casa algunos docentes que piden autorización para pasar a las galerías.

Sr. Presidente (Menem). — Se toma nota, señora senadora, y se procederá en consecuencia.

—Se sigue llamando:

—A las 18 y 21:

Sr. Presidente (Menem). — Continúa la sesión.

2

PROCEDIMIENTO PENAL ORAL

Sr. Presidente (Menem). — Había quedado reservado el dictamen de las comisiones de Inte-

rior y Justicia y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre organización del Poder Judicial de la Nación para la implantación del procedimiento penal oral. Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: se trata de un dictamen unánime de las comisiones de Interior y Justicia y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. Estimo que este proyecto merece un urgente tratamiento por parte de la Cámara, que no va a hacer sino complementar el tratamiento que oportunamente diera lugar a la creación de la justicia oral en lo penal para la Capital Federal.

El proyecto que ahora consideramos está estructurado cuidadosamente, teniendo en cuenta los tribunales ya creados en el país, lo que no significa que no puedan crearse más adelante aquellos que la experiencia aconseje. Tenemos la obligación de no perder tiempo, ya que de no sancionarse este proyecto será inocua la sanción que oportunamente hicimos instituyendo el procedimiento penal oral en la Capital Federal.

Por estas consideraciones, y atento a que el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional figura en el orden del día que obra en las bancas de los señores senadores y es conocido por todos ellos, solicito su aprobación.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Concretamente, señor senador, solicita el tratamiento sobre tablas?

Sr. Aguirre Lanari. — Así es, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Quiero hacerle una pregunta al señor miembro informante.

Con mis asesores habíamos preparado algunas sugerencias sobre ciertos artículos. Le pregunto al señor miembro informante si las ha tomado en cuenta.

Sr. Sánchez. — Cuando entrémos al tratamiento en particular arreglaremos esa cuestión.

Sr. Gass. — Lo planteé ahora para ganar tiempo.

Sr. Aguirre Lanari. — No recuerdo cuál es la materia puntual a que se refiere el señor senador Gass.

Sr. Gass. — Señor presidente: ahora veo que las modificaciones que nosotros proponíamos están contempladas en el orden del día.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

4

TRANSFERENCIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS NACIONALES A LAS PROVINCIAS (CONTINUACION)

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia informa a los señores senadores que el proyecto de ley de la señora senadora Rivas y del señor senador Romero Feris por el cual se transfieren los servicios educativos nacionales a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, contenido en el Orden del Día N° 679, ya ha sido debatido. En consecuencia, corresponde pasar a la votación en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en particular.

La Presidencia informa a los señores senadores que se encuentra sobre sus bancas el texto de las modificaciones que se han formulado a este proyecto de ley.

Sra. Rivas. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: solicito que la votación se haga artículo por artículo para que se puedan formular las correcciones que correspondan en cada uno de ellos.

Sr. Presidente (Menem). — Así se hará.

— Se cita el artículo 1°.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Señor presidente: no participé del estudio que se hizo de este proyecto de ley, pero tengo mi preocupación al respecto. La Presidencia lo hizo votar en general y creo que mi bloque votó. Pero quiero muy brevemente manifestar mis dudas en cuanto a este proyecto frente a una decisión de características muy especiales.

Sr. Presidente (Menem). — Estamos votando en particular, señor senador. Si va a formular consideraciones, corresponde que las haga respecto del artículo 1°. Pero el debate en general

ya se ha agotado y estamos votando en particular.

Sr. León. — En la consideración de cualquiera de los artículos puedo decir lo que pienso respecto de este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Menem). — Entonces, le cedemos la palabra primero al miembro informante para que se expida con relación al artículo 1°, teniendo usted la oportunidad de hacer las consideraciones que estime pertinentes.

Sr. León. — No hay inconveniente.

Sr. Brasesco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Se encuentra en uso de la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Brasesco. — Simplemente quiero hacer una pregunta. Solicito una aclaración.

Todos conocemos el dictamen que estamos considerando. También sabemos que durante los últimos días se consensuó una modificación total a dicho dictamen, teniéndose presentes, por supuesto, el proyecto presentado por la señora senadora por Tucumán y el señor senador Romero Feris y la opinión de los gobernadores de las provincias.

En consecuencia, lo que deseamos saber es si vamos a votar el dictamen de las comisiones, que se encuentra impreso, o si vamos a introducirle modificaciones artículo por artículo. Porque de adoptarse una u otra postura cambiaría, por ejemplo la redacción del artículo 1°.

Sr. Presidente (Menem). — Ya se ha aprobado en general el dictamen.

La Presidencia ha informado que el articulado se va a someter a votación en particular y que la señora miembro informante o los señores senadores propondrán en cada uno de los artículos las modificaciones que estimen pertinentes, como es norma habitual en este tipo de casos.

Sr. Gass. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia estima que este dictamen no merece un tratamiento distinto al habitual.

Sr. Gass. — Solicito la interrupción para ahorrar tiempo, señor presidente.

Sr. Sánchez. — ¡Elemental, doctor Watson!

Sr. Presidente (Menem). — En la medida en que se sigan solicitando aclaraciones que no corresponden, se está perdiendo tiempo.

Sr. Sánchez. — Se votará artículo por artículo.

Sr. Gass. — Hace unas semanas que estamos considerando este asunto; hemos consensuado el proyecto. Entonces, ¿para qué vamos a perder

tiempo introduciendo modificaciones al dictamen?

Sr. Sánchez. — Existe un dictamen.

Sr. Presidente (Menem). — Eso se hace formulando una propuesta, que hasta ahora no se ha hecho.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Solicito que tengamos un poquito de calma, señores senadores...

Sr. Gass. — Radicales.

Sr. Rodríguez Saá. — Calma radicales:

La señora senadora por Tucumán formuló la propuesta que corresponde; es decir, que se someta a votación el dictamen impreso.

Sr. Brasesco. — Ya lo votamos.

Sr. Rodríguez Saá. — Se han realizado varias reuniones, algunas bastante conflictivas y otras que provocaron una cuestión de privilegio, pero con un resultado positivo y bueno, como es el acuerdo entre los gobernadores y legisladores. Esto termina con la propuesta final que ahora vamos a votar. Pero es exactamente lo mismo votar la propuesta que tenemos sobre las bancas o la formulada por la señora senadora por Tucumán.

Considero que la última es la forma correcta; es decir, someter a votación el dictamen artículo por artículo, oportunidad en que la mencionada señora senadora informará las modificaciones que expresan exactamente el acuerdo por todos realizado y que en definitiva es el texto que tenemos sobre las bancas.

El objeto de la votación es el mismo. No merece la pena que nos acaloremos con esta discusión: Si el problema radica en la forma en que se realizará la votación, sigamos dialogando y conversando, recuperemos la calma, y le encontraremos la vuelta al asunto.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Creo que estamos complicando el tratamiento de un asunto tan importante para la vida de la Nación, como ya lo señaláramos en ocasión de su consideración en general.

En este caso, simplemente aplicamos la mecánica parlamentaria. Se realizó la votación en general y ahora votaremos artículo por artículo. A medida que se lea cada uno de ellos, cada señor senador propondrá las modificaciones que su convicción le indique. De esta manera, terminaremos en forma más rápida. ¿Para qué vamos a complicar el asunto?

Sr. Presidente (Menem). — Es lo que la Presidencia propuso.

Sra. Malharro de Torres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Malharro de Torres. — Solicito la palabra por una cuestión de orden.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia otorga el uso de la palabra en el orden en que fue solicitada por los señores senadores.

En consecuencia, tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Cedo el uso de la palabra a la señora senadora por Mendoza.

Sr. Presidente (Menem). — La señora senadora por Tucumán le ha cedido la palabra, señora senadora.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: no podemos negar que lo que tenemos sobre nuestras bancas es producto del consenso a que hemos arribado en estos días.

Sé que hay un procedimiento legislativo correcto, que inclusive lo he conversado con los señores senadores: que la Cámara se constituya en comisión y reconozcamos la autoría de la señora senadora Olijela del Valle Rivas sobre el proyecto de transferencia de escuelas. Lo digo públicamente. Pero seamos conscientes de que esto ya está elaborado. Que se constituya la Cámara en comisión y se acepte este despacho.

De lo contrario, vamos a desvirtuar un montón de aspectos que ha costado mucho evaluar y nos vamos a quedar sin quórum. En ese caso, no va a venir la ley; va a venir el decretazo.

Sr. Sánchez. — ¿Usted sabe bien qué viene?

Sra. Malharro de Torres. — Sí.

Sr. Brasesco. — ¿Y usted lo sabe, señor senador?

—Varios señores senadores hablan a la vez

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: creo que no es esta la primera vez que tratamos un proyecto y que en el recinto se introducen todas las modificaciones correspondientes.

Ayer lo único que se hizo, para cumplir con todos los señores senadores, fue enviar a sus despachos un borrador con las modificaciones que se habían llevado a cabo, que de ninguna manera desvirtúan el proyecto original porque los únicos artículos que se cambiaron fueron los relativos al financiamiento. No advierto el motivo por el cual ahora deba utilizarse otra metodología.

En consecuencia, señor presidente, pido que continúe la consideración en particular y que se lea artículo por artículo para luego votar.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: no quiero incurrir en la figura del mandatario infiel.

Como tenemos experiencia en que a veces, cuando vamos a votar el último artículo de un proyecto, nos quedamos sin quórum, y como el señor senador Romero Feris me ha pedido que solicite a la Cámara que autorice la inserción de algunas observaciones que tiene con respecto al proyecto que vamos a votar en particular, no obstante que es costumbre que las inserciones se soliciten al final, no quiero que una imprevista falta de quórum —atento a que estamos con un quórum muy estricto y limitado— me impida cumplir con aquel cometido.

Por esa razón solicito de la benevolencia de mis colegas que autoricen ahora la inserción que solicita el señor senador Romero Feris.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar la inserción solicitada.

— La votación resulta afirmativa.

— El texto de la inserción es el siguiente:

Señor presidente:

Desde la fecha de la organización institucional, hace más de 138 años, la Nación nunca se dio una ley general de educación, ya que la ley 1.420 y las leyes universitarias sucesivas abarcaron sólo parte del sistema.

Para romper ese silencio legislativo presenté en julio de 1988 un proyecto de ley general de educación ante el Honorable Senado y lo reproduje en mayo de 1990. En ambos casos digo textualmente:

Artículo 41: La Nación transferirá a las jurisdicciones provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, todos los establecimientos del actual nivel secundario y terciario de formación docente que estén bajo su dependencia en el momento de la fecha efectiva de la transferencia y, por el término de diez años consecutivos, girará a las respectivas provincias el presupuesto íntegro que actualmente insumen dichos establecimientos, a valores actualizados mes a mes, más las partidas necesarias para cubrir los gastos que demande la atención del crecimiento matricular en esos establecimientos.

Artículo 42: Déjase establecido que la nueva estructura del sistema nacional de educación comenzará a tener aplicación a partir del 1° de enero de 1990, con la gradualidad y progresión que se determinen mediante convenios interjurisdiccionales previstos.

Entonces no quedan dudas de mi adhesión, desde hace varios años, a estos conceptos esenciales:

La necesidad de la transferencia de los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel terciario de formación docente, inclusive.

La condición de asegurar su financiamiento por parte de la Nación y por un período razonablemente prolongado.

El requisito de la gradualidad, y

La suscripción de convenios interjurisdiccionales.

Se trata de una medida política trascendente, pero ¿cuál es su marco referencial? ¿Qué supone esta proyectada transferencia de servicios? ¿Qué alcances tiene la cesión de éstos a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es una mera desconcentración? ¿O se trata de una descentralización abordada desde el reconocimiento de las provincias como entidades políticas capaces de asumir en profundidad el desafío?

Conviene, por lo tanto, definir perfectamente los términos para que pueda efectuarse un análisis claro, sobre todo sereno, de esta medida que es un primer avance para encarar la transformación profunda que todos estamos reclamando del sistema educativo, quedándonos —duele decirlo— muchas veces en la retórica. Quizá por eso no damos todavía al país un instrumento legal que catalice sus poderosas fuerzas espirituales y su genio creador y se tracen, mediante una ley general de educación, las grandes líneas para mover esas fuerzas y generar los cambios.

La desconcentración educativa es solamente la delegación de determinadas funciones por parte del Estado central a entidades regionales o locales.

La descentralización, en cambio, es el proceso por el que diversas entidades, con grados significativos de autonomía, definen las formas propias en que se organizará y administrará el sistema de educación pública en sus respectivas áreas. En la descentralización ya no hay únicamente una delegación de facultades operativas sino también el ejercicio del poder de decisión, un poder real sobre aspectos como el financiamiento, la elaboración de currículo y la gestión administrativa.

Así explicado resulta obvio que la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias es un proceso de descentralización, básicamente inspirado en el respeto a las autonomías provinciales y a su capacidad de gobernar ese proceso.

Por lo tanto, sus objetivos responden a una concepción política sobre la distribución del poder, pero simultáneamente apuntan de manera fundamental a acrecentar la calidad pedagógica del sistema educativo.

Esos objetivos son:

1. Mejorar la eficiencia y modernizar el sistema, terminando con una administración burocrática y centralizada.

2. Mejorar la gestión administrativa, incorporando más actores sociales en los procesos de decisión. La descentralización se convierte así en un sinónimo de democratización.

3. Aumentar la efectividad del sistema para desterrar el fracaso escolar, que deriva de una administración monopólica, del currículo uniforme, del unicato. Y estimular la iniciativa institucional y comunitaria.

Nadie puede dejar de coincidir con estos objetivos.

Aunque su logro pierda relevancia con relación a la prioridad que adquiere, sin duda tiene tanto el problema del financiamiento como el de la estrategia que se adopte para su implementación exitosa.

El proyecto de ley que he suscripto con la senadora Olijela del Valle Rivas responde a esa concepción. Por eso contiene precisiones que evitarán cualquier interpretación legal que haga desviar la práctica de la teoría. Y evitará también repetir la experiencia negativa cuando se concretó la transferencia de las escuelas nacionales primarias a las provincias, dejándola a éstas libradas a sus propios recursos. A más de 10 años de esa acción, podemos afirmar que las provincias pudieron superar gran parte de las múltiples dificultades que surgieron de una instrumentación apresurada, aunque deba admitirse que superar esas dificultades implicó ingentes esfuerzos humanos y financieros.

El proyecto de ley que hoy abordamos pone el énfasis del proceso de transferencia en los convenios interjurisdiccionales: es en esos convenios donde se acordarán medidas sustanciales pero, a la vez, particulares, con cada una de las provincias: la fecha de la transferencia, la gradualidad, la cantidad de los servicios a traspasar en cada etapa, el estado de los edificios, entre otras especificaciones, con cuidadoso inventario de muebles, inmuebles y semovientes que se cedan, su estado de conservación y el compromiso del Estado nacional de asumir su reparación si fuera necesario; la nómina completa del personal, con claro detalle de su situación de revista, funciones, retribución, antigüedad, etcétera.

Su texto asegura a los docentes la protección de sus derechos, formula pautas claras para asegurar el financiamiento de los servicios transferidos y reconoce las facultades de las jurisdicciones receptoras de acordar en los convenios el cuándo, el cómo, el cuánto, con intervención de las Legislaturas provinciales.

El Capítulo III establece las garantías imprescindibles para el personal transferido en cuanto a función, retribuciones, reconocimiento de antigüedad, estabilidad y antecedentes profesionales, obra social, jubilaciones, el beneficio de la caja complementaria, la definición de cuestiones disciplinarias pendientes y la resolución de todos los concursos docentes y titularizaciones en trámite.

El Capítulo IV, titulado "Del financiamiento" ofrece una normativa que garantiza a las jurisdicciones receptoras la real percepción de los fondos para sostener sin riesgos ni angustias los gastos que demande el correcto funcionamiento de los servicios transferidos.

Preserva la ley 23.548 de Coparticipación Federal y establece los mecanismos para que las provincias, en todos los casos, cubran total y automáticamente el costo mensual de dichos servicios, quedando bajo la responsabilidad del gobierno nacional financiar de la misma manera, es decir automáticamente, toda diferencia.

Tiene en cuenta, además, la situación de las obras públicas en ejecución, cuya terminación será responsabilidad del Estado nacional.

El proyecto de ley que analizamos contempla también los aspectos pedagógicos. En un sistema federalizado es conveniente redefinir las funciones del Ministerio de Cultura y Educación el que, de acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación, coordinará, compatibilizará y evaluará el sistema educativo nacional, promoviendo la estructura común de dicho sistema, cuya función esencial será resguardar la coherencia, unidad e integración del país en el marco del federalismo.

En un nuevo texto, el Capítulo VI titulado "De la enseñanza privada" establece la normativa para ese importante subsistema educativo, a cuyos servicios garantiza su funcionamiento en libertad, con pleno respeto a sus características éticas, curriculares y pedagógicas así como el mantenimiento del régimen de aportes, en concordancia con el orden nacional en lo que hace a montos, proporciones y destino de los servicios educativos.

Este proyecto, de ser sancionado, permitirá que la cercanía de los problemas haga factible una solución más rápida y efectiva, dando a la vez la oportunidad de una mejor integración comunidad-escuela y una mayor dinámica en la gestión pedagógica y administrativa.

La ley de transferencia de los servicios educativos nacionales es un primer paso. El segundo, inevitable e igualmente urgente, es la sanción de la ley general de educación.

Respondamos al desafío.

Por eso debo requerir, al mismo tiempo, el pronto tratamiento de la ley general de educación, previo dictamen de la comisión respectiva, para dar así al país los instrumentos legales que posibiliten la pronta transformación del sistema educativo argentino con un objetivo claro y prioritario: mejorarlo cualitativamente y poner al país entre los mejores del mundo por el nivel de formación de sus habitantes, liderazgo lamentablemente resignado en los últimos años y que debemos recuperar porque no puede soslayarse esta realidad.

La ley general de educación debió tener prelación sobre la ley de transferencia para preservar la cohesión del sistema, la articulación ordenada de las estructuras y la unidad espiritual de la Nación, a la que se accede por vía de la educación.

Señor presidente: las razones expuestas hablan por sí mismas. Estamos en un punto crucial en el que detenerse es retroceder. Sancionar este proyecto de ley ayudará a avanzar y a exigir la modernización global de todo el sistema educativo.

Sr. Presidente (Menem). — Voy a cederle la palabra a la señora senadora miembro informante, como corresponde, para que ella indique las modificaciones que se proponen al artículo 1º.

Sra. Rivas. — Señor presidente: el artículo 1º del dictamen original ha sido modificado y se encuentra en Secretaría para ser leído.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se va a leer el artículo 1º con las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

CAPÍTULO I

De la transferencia

Artículo 1º. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a transferir, a partir del 1º de enero de 1992, a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos pri-

vados reconocidos, en las condiciones que prescribe esta ley.

Se exceptúan las escuelas superiores normales e institutos superiores, tanto estatales como privados, y la ENET N° 1 "Otto Krause", la Telescuela Técnica y los centros de recursos humanos y capacitación números 3, 8 y 10 de Capital Federal dependientes del CONET. Queda a criterio del Poder Ejecutivo nacional la oportunidad de transferir estos servicios en forma total o parcial previa garantía de financiamiento.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Creo que es el momento, señor presidente, de expresar muy brevemente mis ideas sobre el proyecto que estamos tratando porque este artículo 1° habla de la transferencia de servicios.

Estoy representando acá a una provincia, el Chaco.

Sé que con respecto a este proyecto ha habido una generosa preocupación por parte de todos los señores senadores y de los gobernadores. Se trata nada menos que de un capítulo de la educación que para los partidos políticos aquí representados constituye una especie de ley fundamental en lo que se refiere a nuestra responsabilidad y militancia.

Sin embargo, pese al consenso existente, no voy a votar, no por indisciplina respecto de mi bloque, sino por una especial interpretación que hago acerca de la estructura, de la incubación y el desarrollo respecto de este tema.

Creo que este proyecto va por un lado —lo que es muy positivo— en busca de una afirmación federal. Por otra parte, parecería una declinación federal, por tratarse de un proyecto que con fórceps ha sido insertado en la aceptación de la mayoría de las provincias.

Originariamente hubo resistencia. Ayer no más, o anteayer, hubo una reunión de gobernadores tendiente a lograr compromisos. Lo que pongo en duda es la base de financiamiento que tiene este proyecto. Porque vamos a votar una iniciativa que hasta este momento ciertamente no podemos decir que será rigurosamente complementada, de acuerdo con los recaudos a tomar.

Desde hace un tiempo en nuestro país se están poniendo en marcha políticas que se van a resolver o no de acuerdo con lo que establezcan ciertos factores y palancas que no controlamos.

Si por ejemplo fallase alguna de las estrategias del Ejecutivo en cuanto al sector externo, estaríamos arriesgando el funcionamiento de esta iniciativa. De igual manera, si fallasen algunas

de las condescendencias que estamos buscando, seguramente este proyecto no va a funcionar, y entonces las provincias se van a ver todavía más complicadas que ahora.

En cuanto a este problema de la educación. —lo digo con mucho respeto—, creo que el pensamiento debe ser exclusivamente nacional; tengo la idea de que en este gobierno sucede lo que ocurrió en algunos aspectos del anterior, cuando por ahí, por privilegiar el amiguismo, la condescendencia partidaria, dejamos al margen del camino algunas actitudes que ponen a la Nación en primer lugar.

Saben que hablo respetuosamente; pareciera que antes algunas leyes se sancionaban porque había que coordinar posiciones con el presidente de hace veinte, diez o cinco años. Ahora hay estrategias elaboradas que debo respetar porque se trata de la mayoría.

Sin embargo, debo marcar mi actitud en defensa de lo que creo es la educación en mi provincia.

Sr. Presidente (Menem). — Si me permite, señor senador, debo ajustarme al reglamento, ya que estamos en la votación en particular del proyecto.

La Presidencia comprende que el señor senador no haya podido exponer, ya que por un problema de salud no estuvo presente en la correspondiente oportunidad. Pero como dije, también se debe respetar el reglamento, ya que el dictamen se está considerando en particular.

La Presidencia le ruega al señor senador por el Chaco que se ciña a las observaciones que deba formular respecto del artículo 1°. De lo contrario, estaríamos abriendo nuevamente el debate en general.

Sr. León. — Justamente manifiesto mis humildes ideas respecto de un artículo que se refiere a la transferencia de los servicios, que es una carta bastante importante como para explicar muchas de nuestras preocupaciones.

No quiero hacer perder tiempo a la Cámara, señor presidente. Llegué para votar y se votó; la verdad es que llegaba en ese momento.

Pero quería dejar en claro mi pensamiento sobre este proyecto. Creo que podríamos haber trabajado sin tanto apuro.

Teníamos un presupuesto que hoy se encuentra demorado porque se lo modificó totalmente a través de un decreto. Creo que este tipo de funcionamiento, en el que parecerá que a la mañana el gobierno no sabe lo que va a hacer a la tarde, complica la sanción de la legislación de

fondo, como nada más y nada menos es el caso de la educación.

Quería decir simplemente estas palabras. Como tengo mis dudas no quiero equivocarme. Para que este proyecto sirva estamos dependiendo de algunos factores que el gobierno no tiene bajo control. Lo dije hace instantes: si algunos factores de afuera no jugaran con condescendencia, seguramente fracasarían muchos de los planes diseñados.

Mi deseo es que todo vaya bien y funcione, que el país avance, que juntos lo saquemos adelante. Tengo el derecho de expresar mi opinión —y así lo hago en este momento—, que es totalmente contraria a este proyecto de ley según la forma en que ha sido elaborado y por las consecuencias que puede traer en cuanto al funcionamiento de los estados federales, de los que en este momento represento al Chaco. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: el señor senador por el Chaco, doctor Luis León, merece todo mi respeto. Se trata de un hombre de viejas luchas contra la prepotencia entronizada en el país, por distintas razones hombre conocido en nuestra América latina, prohombre del Congreso Latinoamericano. Pero lo veo con un excesivo tremendismo frente a esta situación.

Creo que aquí se están aventando algunos fantasmas que nacen de lógicas preocupaciones.

Las palabras que acaba de pronunciar el señor senador por el Chaco representan una acusación directa a nuestro gobierno, de signo peronista, pero del que nadie puede negar que abrió los brazos —y demasiado los abrió— para convocar a todos los argentinos en la tarea de recuperación de la República.

El señor presidente tiene razón cuando dice que estamos volviendo sobre el tratamiento en general. No quiero dilatar la votación de este proyecto. Pero tampoco puedo callar frente a estas cosas que se están diciendo aunque expresen sinceramente la inquietud de los señores senadores.

Aquí se habla de que estamos supeditados a la buena o mala voluntad de factores externos para poder seguir caminando. ¡Vaya secreto que nos vienen a decir! Toda la vida estuvimos de una u otra manera acosados desde el exterior. Fuimos hostigados por ideas disolventes que llegaron al terreno de la lucha armada. También lo fuimos permanentemente por los intereses económicos durante todos los tiempos, a través de presiones de intervenciones descaradas, a través de todos

los mecanismos que sabemos que estos factores pueden manejar.

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: le ruego...

Sr. Sánchez. — ¡Señor presidente: estamos debatiendo el problema de la República!

Sr. Presidente (Menem). — Estamos debatiendo el artículo 1º, señor senador.

Sr. Sánchez. — ¡Sí, señor presidente, pero de todas las provincias la mía es la primera a la que se han transferido las escuelas, y usted lo sabe porque también representa a La Rioja!

Disculpeme, señor presidente, que yo abuse de la paciencia del cuerpo y de su buena voluntad para escucharme. Pero éste es el problema de fondo: la educación. No queremos más que cada escuela sea un "enseñadero" disculpen el barbarismo, sino que sea un establecimiento educacional, un establecimiento que forme cultura y en el que ésta tenga perfil nacional, continental, y una cosmovisión para que realmente nos sintamos seres humanos, como un hecho trascendente en la vida del mundo.

¿Por qué le tememos a esto de tener el dinero o no tenerlo? Vamos a sacar el dinero de este Parlamento cuando el Poder Ejecutivo nos lo niegue, porque este Parlamento es uno de los poderes de la Nación, es el poder de contralor y el que dicta las leyes. Que se hayan trastrocado las cosas es parte de la crisis, de la perversión que está inserta en el espíritu argentino a lo largo de un montón de años en los que se han ido acumulando una serie de desastres que trajeron como resultado que muchas veces nos veamos obligados a hacer cosas que no nos gustan pero tenemos que aceptar porque no nos queda otro camino.

No habrá problema económico, señor presidente, mientras el Parlamento argentino y el Poder Ejecutivo puedan compatibilizar las decisiones económicas, porque de ninguna manera dejaremos de lado el sostenimiento de la educación, que en este caso estamos tratando de transferir a las provincias para que éstas, con un manejo bien conciso y preciso puedan determinar las pautas culturales de la Nación Argentina en los andariveles de nuestra americanidad.

Por eso no podemos seguir hablando en estos tonos tremendistas, de que aquí o allá está mal algún número u otro. Estamos hablando del espíritu de la Nación, frente a las consecuencias que estamos pagando de una educación distorsionada.

Vivimos en este siglo de la tecnología, que casi parece una fabulosa ciencia ficción, dando un

salto impresionante hacia el futuro, mientras debatimos pequeñeces. Esto es demasiado importante para perdernos en espectacularidades circenses, para seguir declamando.

Discúlpeme, señor presidente, que haya robado este tiempo, pero tengo que decir estas cosas porque reflejan la angustia de mi país, del continente y del mundo.

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Brasesco. — Le cedo la palabra al señor senador por el Chubut.

Sr. Presidente (Menem). — Dado que el señor senador por Entre Ríos le ha cedido el uso de la palabra, tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: quiero fundar brevemente mi voto en contra de este artículo 1º, con lo cual fijaré el alcance de mi oposición en general a este proyecto.

Para que no queden dudas sobre cuál es mi posición —y según creo también la del señor senador León, que habló anteriormente—; quiero decir que tiene razón el señor senador por La Rioja. Nosotros nos oponemos a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que perjudica a nuestras provincias, a los estados federales, al mismo tiempo que lleva al Poder Ejecutivo a abdicar de una serie de obligaciones que es fundamental que asuma el Estado.

Quiero destacar que ha habido diálogo; es un hecho positivo, pues no en vano vivimos en democracia, y el diálogo tiene que ser una herramienta fundamental del sistema. Pero detrás de este proyecto de ley se oculta un verdadero avasallamiento, una imposición a las provincias: no tienen más alternativa que aceptar el traspaso, porque de no hacerlo sufrirían una serie de consecuencias que no están en condiciones de afrontar.

Las cifras que maneja el Poder Ejecutivo, en particular el señor ministro de Economía, sobre los aumentos de los ingresos impositivos no coinciden con las que posee el gobierno de mi provincia. No tenemos superávit, y a duras penas en julio, agosto y septiembre hemos estado orillando el equilibrio, teniendo inclusive un déficit, tal como resulta de la comparación entre los recursos y los gastos. Así, en julio, por ejemplo, tuvimos ingresos por 180 mil 900 millones de australes y gastos por 170,5; en agosto fueron de 168,7 y 185,9, respectivamente; y en julio, 161,4 de ingresos y 193,7 de egresos. Si a esta última cifra le sumáramos los 13 mil millones de australes derivados de la transferencia de las es-

cuelas, llegaríamos a 206,7 de gastos, contra 161,4 que corresponden a los ingresos.

No estamos en condiciones de aceptar la transferencia de las escuelas por más que se nos prometa una negociación que será muy difícil, como lo es la de las provincias con la Nación, en cada oportunidad en que no se cubra el déficit. Y esto, señor presidente, sin contar el problema que se va a crear con los derechos previsionales y asistenciales de los docentes, a los que tendrán que hacer frente las provincias.

El año pasado presenté un proyecto que fue aprobado por unanimidad en esta Cámara, por el que se le solicitaba al Poder Ejecutivo que garantizara los derechos previsionales y asistenciales de los docentes al transferir a las provincias los servicios educativos. Eso no está garantizado y es un motivo más para que, como corresponde a los legisladores de la oposición, no podamos aceptar sin protestar esta transferencia que las provincias no están en condiciones de afrontar.

La provincia del Chubut, por ejemplo, según me lo han informado las autoridades constitucionales, va a tener que dedicar el 21 por ciento de los impuestos coparticipables para hacerse cargo de la transferencia. Y esto sin contar una parte suplementaria del presupuesto para poner en condiciones edificios absolutamente deteriorados que nos va a entregar la Nación.

Por estas razones, señor presidente, es que mi voto va a ser en contra del proyecto en consideración. Como no voy a pedir la palabra artículo por artículo, con estas consideraciones y advertencias generales que me dicta mi conciencia de legislador dejo fundado mi voto adverso.

Pienso que cuando los gobiernos no asumen las obligaciones en su debido momento, tarde o temprano tendrán que soportar las consecuencias de sus omisiones. No quiero que éste sea el caso para mi país ni para mi provincia.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Señor presidente: me veo en la difícil situación de que por primera vez en mi bloque haya disidencias después de haber votado un proyecto de ley en general.

Quiero decir con absoluta franqueza que por intermedio de nuestra senadora, quien se ocupa específicamente de los asuntos de educación, hemos estado discutiendo durante semanas este tema. A ninguno de nosotros nos gustaba el proyecto de ley. Todos pensábamos que la transferencia de las escuelas a las provincias no era la solución adecuada, sobre todo sabiendo que al-

gunas no estarán en condiciones de seguir dando educación a su pueblo, como tal vez sí pueda hacerlo la Nación.

No obstante, ante la evidencia de que iba a salir esta ley nos pusimos a trabajar para tratar de mejorarla en todo lo posible. Fuimos a todas las reuniones para las que nos convocaron, y lo hicimos quienes entienden mucho en materia económica y quienes no conocemos en profundidad ese aspecto. Permanentemente pusimos el acento en pedir para cada una de nuestras provincias el máximo de recursos a fin de poder brindar educación.

Soy representante de Buenos Aires, que constantemente es atacada por todos los federalistas de la República porque somos la provincia rica y grande. Pero se olvidan de que somos el bien de muchísimos compatriotas que viven en nuestro distrito, que vienen al conurbano...

Sr. Sánchez. — Por la estructura del país.

Sr. Gass. — Pero la estructura del país, señor presidente, no la diseñé yo. Estoy diciendo lo que ocurre, no lo que me gustaría que ocurriera. No me gusta que mis compatriotas de otras provincias vengan a Buenos Aires por razones de necesidad, pero vienen, y ésta es una realidad.

Tampoco estoy contento con lo que se le asigna a mi provincia porque nos preguntamos: ¿Cuántos serán los docentes que debemos incorporar? ¿Cuántos serán los colegios que debemos atender? ¿Podremos dar una solución pagándoles dignamente?

Permanentemente hay huelgas docentes en mi provincia. Cuando no es un sindicato es otro. No lo hacen para divertirse sino por razones de necesidad; no les alcanza para vivir. Esta es la situación en la que se encuentra la República.

Hemos discutido esto con el ministro Cavallo. El senador Trilla, a quien respeto por sus conocimientos en economía, ha hecho todos los esfuerzos posibles para encontrar una solución mejor. Inclusive fue a la reunión que se realizó en la Casa de Gobierno, a la que lamentablemente no dejaron entrar a los señores senadores. No quiero avanzar sobre esto porque el señor presidente provisional y los senadores de la mayoría han sido bastante correctos al darnos las excusas correspondientes.

De cualquier modo, en esa reunión había gobernadores que no objetaron este proyecto de ley. Seguramente pelearon para conseguir un punto más en el reparto, pero no se opusieron totalmente a la iniciativa.

Menciono específicamente el caso del gobernador electo de la provincia del Chubut, correlati-

gionario nuestro, que va a asumir su cargo el 10 de diciembre próximo. El estuvo en la reunión con el senador Trilla y no se opuso a este proyecto de ley. Esto quiere decir que habrá interpretado que no había una solución mejor y tuvo que asumirla...

Sr. León. — Lo que pasa es que es maestro.

Sr. Sánchez. — Claro, él es Maestro.

Sr. Gass. — Es un gran maestro; no se preocupe porque va a hacer una buena gobernación.

En nuestro bloque somos muy democráticos. El presidente no obliga; conversa y trata de convencer. Cuando no puede hacerlo deja que cada señor senador, de acuerdo con la representación que ejerce de su provincia adopte la actitud que le parezca más correcta, más digna y más útil para su jurisdicción. Por eso somos federales.

Señor presidente: ésta es la aclaración que quería formular.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con la modificación propuesta por la señora senadora por Tucumán.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 2º.

Sra. Rivas. — En la primera parte, en lugar de "...necesidades y posibilidades...", debe decir "...particularidades...". Que se lea por Secretaría el texto completo del artículo con esta modificación.

Sr. Presidente (Menem). — Se dará lectura al artículo 2º.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

Artículo 2º. — Los requisitos específicos de las transferencias se establecerán mediante convenios a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y cada una de las jurisdicciones, en los que se acordará toda otra cuestión no prevista en la presente ley de acuerdo con las particularidades de cada jurisdicción. Dichos convenios serán refrendados según la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones por medio de las Legislaturas provinciales.

Sra. Malharro de Torres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Solicito que se agregue a continuación de "...Legislaturas provinciales..." la frase: "...y del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires...".

Sra. Rivas. — No, no voy a aceptar la incorporación de esa frase.

Sr. Gass. — ¿Con qué argumento?

Sra. Malharro de Torres. — Que dé los argumentos, si no parece una niña caprichosa. (*Risas.*)

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente, señores senadores: no corresponde otorgar esa atribución al Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires ya que, como lo establece la Constitución, este Congreso es la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires y no el Concejo Deliberante, que es un organismo que actúa por delegación nuestra. Decidimos no delegar esta facultad del Congreso de la Nación. Esto es así mientras no se reforme la Constitución. El Concejo Deliberante tiene en este sentido una existencia efímera. La Constitución del 49 no contemplaba su existencia. Tanto el intendente como el Concejo Deliberante tienen las facultades delegadas por el Congreso, que en este caso decide retenerlas.

Sr. Rodríguez Saá. — ¡Qué tal! (*Risas.*)

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Marín. — Quiero hacer una aclaración en virtud de que se ha indicado que este proyecto de ley contempla el derecho que tienen las provincias en cuanto a aceptar el acuerdo o no.

Expresamente dice que los convenios serán refrendados según la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones, por medio de las Legislaturas provinciales. Como con este proyecto de ley realmente se trató de desvirtuar el federalismo —problema que expresamente hubiese correspondido tratar ahora—. De acuerdo con este artículo, las provincias toman a las escuelas si quieren; si no lo quieren, no.

Sra. Malharro de Torres. — Exacto.

Sr. Marín. — Este es el planteo que hiciera previamente un señor senador y es el derecho que da cobertura a cada distrito para resolver sobre la transferencia, tema que el Senado hoy dilucida.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Quería corregir algunos conceptos vertidos con la pretensión de conocer más sobre el tema. El propio artículo que vamos a votar dice "...de acuerdo con las particularidades de cada jurisdicción". La Capital Federal ya tiene todas las escuelas primarias y ahora se agregan las secundarias. Todo aquello que está relacionado con aspectos tales como sueldos, ingresos, jubilaciones, etcétera, casualmente se trata en el Concejo Deliberante y no en el Congreso nacional. Estas particularidades permiten

democratizar en mayor medida un tema de esa naturaleza, porque de lo contrario —se habló de legisladores sui generis de la Capital Federal u otra calificación, lo que escuché puede ser modificado en cualquier momento— se trataría de un autoritarismo.

Por ello me parece prudente, interesante y novedoso el agregado propuesto. A su vez, la inmediatez del Departamento Ejecutivo en el manejo de este tema y de quienes deliberan sobre estos aspectos debe mantenerse en el distrito de la Capital Federal y de aquellos que manejan el problema de las escuelas. Además ya han sido delegadas atribuciones del Congreso Nacional a la Intendencia y al Concejo Deliberante por la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Menem). — Si no hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º como lo ha propuesto la señora senadora por Tucumán.

—La votación resulta afirmativa.

Sra. Malharro de Torres. — Pido que quede constancia de que nosotros no lo votamos.

—Se cita el artículo 3º.

Sra. Rivas. — No tiene modificaciones, señor presidente. Mantiene la redacción del proyecto original.

Sr. Gass. — Que se lea.

Sr. Presidente (Menem). — Los señores senadores tienen el texto sobre sus bancas. Además, según acaba de manifestar la señora senadora por Tucumán, no se le introdujeron modificaciones. Está en el orden del día.

Sr. Brasesco. — Ya sé que está en el orden del día, pero como se está leyendo...

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se va a dar lectura al texto, de acuerdo al pedido formulado por los señores senadores.

Sr. Secretario (Flombaum). — (*Lee*)

Artículo 3º. — Las jurisdicciones receptoras, con el apoyo sostenido del Poder Ejecutivo nacional, deberán cumplir todos los derechos y obligaciones vigentes en materia educativa. El Estado nacional garantizará que los servicios transferidos sean prestados con óptima cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y equidad en todas las jurisdicciones.

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Brasesco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Esta segunda parte del artículo tercero tiene un contenido paternalista de parte del Estado nacional, ya que no alcanzo a

entender cómo van a actuar las provincias cuando administren las escuelas. Tienen que ser ellas las que dicten sus planes y las que los dirijan. Esa es la parte positiva de este proyecto. Pero, ¿cómo el Estado nacional garantizará que los servicios transferidos sean prestados con óptima cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y equidad en todas las jurisdicciones? ¿Va a enviar inspectores a las provincias? ¿Va a menoscabar nuestros derechos provinciales? Es incomprensible la redacción que objeto.

—El señor senador Sánchez formula manifestaciones que no se alcanzan a percibir.

Sr. Solari Yrigoyen. — Si el señor senador quiere una interrupción, se la concedo con todo gusto.

Sr. Presidente (Menem). — Ruego no interrumpir.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Si se habla al mismo tiempo, no puedo entender lo que se dice.

Sr. Presidente (Menem). — Está en todo su derecho, señor senador

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Con esto sintetizo mis dudas, que implican también una crítica. Tal como está redactada esta frase no tiene viabilidad, porque las provincias no pueden aceptar una suerte de control por parte de la Nación para que se cumplan estos requisitos, que ellas tienen que cumplir en uso y goce de su plena autonomía.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Le ruego al señor senador por el Chubut que proponga una modificación, en la que seguramente lo vamos a acompañar.

Sr. Presidente (Menem). — No es ése el procedimiento. El señor senador por el Chubut formuló sus manifestaciones al hacer uso de la palabra.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º tal como figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se dará lectura al artículo 4º.

Sr. Secretario (Flombaum). — (*Lee*)

Artículo 4º. — Las transferencias que se convengan se efectuarán sin otro cargo que los que establece la presente ley, e importarán la sucesión a título universal de los derechos y obligaciones.

Sra. Rivas. — No propondré modificaciones para el artículo 4º.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 4º tal como figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se cita el artículo 5º.

Sra. Rivas. — En este artículo se suprime únicamente el inciso *e*) que figura en el dictamen. Solicito que por Secretaría se dé lectura a la nueva redacción.

Sr. Secretario (Flombaum). — (*Lee*)

CAPÍTULO II

De los bienes transferidos

Artículo 5º. — La transferencia de los servicios educativos a cada una de las jurisdicciones, comprenderá los bienes libres de todo gravamen actualmente afectados al Ministerio de Cultura y Educación y al Consejo Nacional de Educación Técnica, a saber: *a*) el dominio y todo otro derecho que el gobierno nacional tendrá sobre los bienes inmuebles y sus accesorios, cualquiera sea el origen de sus derechos, con destino actual o previsto para establecimientos educacionales y organismos de apoyo al sistema educativo; *b*) los bienes muebles de todo tipo, incluyendo equipos, semovientes y elementos de uso y consumo regular; *c*) la documentación y todo otro antecedente relativo a los inmuebles y muebles transferidos que sean de utilidad a las jurisdicciones receptoras; *d*) los contratos de locación de cosas, obras y servicios, sin perjuicio de las adecuaciones contractuales necesarias a fin de mantener la continuidad de los servicios.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Salvo que haya sido mal leído, en el inciso *a*) debería decir "tenga" y no "tendrá". Es decir, el dominio y todo otro derecho que el gobierno tenga al momento de la transferencia.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — De acuerdo con la modificación propuesta en el inciso *a*), el término utilizado es "tenga".

Sr. Trilla. — Por Secretaría, se leyó "tendrá".

Sr. Presidente (Menem). — El texto modificado dice "tenga".

Sr. Trilla. — Entonces, fue mal leído.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a llamar para votar porque estamos sin quórum.

—Así se hace.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia ruega al señor senador por La Rioja que tome asiento en su banca.

Se va a votar el artículo 5º con la modificación propuesta.

—La votación resulta afirmativa.

—Se cita el artículo 6º.

Sra. Rivas. — No proponemos ninguna modificación con respecto a este artículo. Solicito que se le dé lectura.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

Artículo 6º. — No serán transferidos los juicios pendientes ni las deudas que por cualquier causa hubiera contraído la Nación a la fecha de la transferencia.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—Se cita el artículo 7º.

Sra. Rivas. — Este artículo tampoco tiene modificaciones, señor presidente. Solicito que se le dé lectura.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

Artículo 7º. — En el caso de que el dominio y/o la propiedad de los bienes inmuebles y/o muebles y/o derechos que se transfieran provengan de donaciones o legados con cargo, la jurisdicción receptora garantizará su cumplimiento y los derechos de quienes resulten beneficiarios de tales cargos.

Sra. Malharro de Torres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: a fin de mejorar la redacción desde el punto de vista legislativo y de la intencionalidad, propongo que en lugar de decir "dominio y/o la propiedad de los bienes inmuebles y/o muebles y/o derechos", diga "dominio o la propiedad de los bienes inmuebles o muebles o derechos".

Sra. Rivas. — No tengo inconveniente alguno. Acepto la modificación propuesta por la señora senadora por Mendoza.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Benítez. — Señor presidente: creo que se ha deslizado un error en este artículo, ya que habla de "donaciones o delegados". Entiendo que debe referirse a legados.

Sr. Rodríguez Saá. — Debe decir "de donaciones o de legados".

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 7º con las modificaciones propuestas por la señora senadora por Mendoza y la aclaración del señor senador por Jujuy.

—La votación resulta afirmativa.

—Se cita el artículo 8º.

Sra. Rivas. — Hay una modificación a este artículo, específicamente en el inciso b).

Solicito que se lea por Secretaría.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

CAPÍTULO III

Del personal transferido

Artículo 8º. — El personal docente, técnico, administrativo y de servicios generales que se desempeñe en los servicios que se transfieren quedará incorporado a la administración provincial o municipal en su caso, de conformidad con las siguientes bases:

- a) Identidad o equivalencia en la función, jerarquía y situación de revista en que se encontrare a la fecha de la transferencia;
- b) Retribución por todo concepto no inferior a la que se perciba al momento de la transferencia y equiparación a la escala salarial jurisdiccional durante 1992;
- c) Reconocimiento de la antigüedad en la carrera y en el cargo, ya sea en carácter de titular, interino o suplente;
- d) Reconocimiento a la estabilidad en el cargo u horas cátedra que desempeñe al tiempo de la transferencia cuando revistiere en calidad de titular, interino o suplente según la normativa vigente;
- e) Reconocimiento de títulos y antecedentes profesionales valorables para concurso de la carrera docente en equivalencia de condiciones con las vigentes para los docentes de la jurisdicción receptora.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Marín. — Propongo que al final del inciso d) se agregue "según la normativa en cada jurisdicción".

Sr. Presidente (Menem). — Según la normativa vigente en cada jurisdicción.

Sr. Marín. — Exactamente.

Sra. Rivas. — Acepto la modificación propuesta por el señor senador por La Pampa.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: ¿en qué consiste la estabilidad del interino y del suplente?

Formulo la pregunta porque yo he sido docente y sé que el interino y el suplente nunca tienen estabilidad. Entonces, quiero saber qué garantía es esta de la estabilidad del interino y del suplente.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Menem). — Ruego a la señora senadora no dialogar. Diríjase a la Presidencia.

Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — La estabilidad es de acuerdo al Estatuto del Docente, señor senador. Por eso el inciso *d*) del artículo 8° habla del reconocimiento a la estabilidad en la categoría que revisiere —ya sea titular, interino o suplente— según la normativa vigente en cada jurisdicción, de acuerdo con lo que propone el señor senador por La Pampa.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: no nos caben dudas de que este inciso y el espíritu del proyecto que estamos votando, para cuya aprobación estoy levantando la mano como si fuera de plomo porque tengo un acuerdo establecido pero que me duele, no garantizan ninguna estabilidad.

Por esa razón, cuando lleguemos al artículo 13 voy a hacer una propuesta concreta para asegurar la estabilidad del personal de las escuelas nacionales que se transfieren. Pero quiero dejar en claro que esto no garantiza ninguna estabilidad.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 8° con la modificación propuesta por el señor senador por La Pampa.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 9°.

Sra. Rivas. — Para este artículo no hay modificaciones. Solicito que sea leído por Secretaría.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 9°, con la redacción que figura en el dictamen.

Sr. Secretario (Flombaum). — (*Lee*)

Artículo 9°. — Las jurisdicciones podrán convenir mecanismos para facilitar al personal transferido optar por continuar en la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), en cuyo caso el gobierno de la jurisdicción deberá actuar como agente de retención de los correspondientes aportes, o incorporarse a la obra social de la jurisdicción receptora.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9°.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 10.

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Sra. Malharro de Torres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — En primer lugar hará uso de la palabra la senadora miembro informante y luego los otros señores senadores.

Sra. Rivas. — En el artículo 10 no hay modificaciones, de acuerdo con el dictamen original, señor presidente. Solicito que por Secretaría sea leído.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 10, tal como figura en el dictamen.

Sr. Secretario (Flombaum). — (*Lee*)

Artículo 10. — A los efectos previsionales, las jurisdicciones receptoras reconocerán los servicios prestados por el personal en el orden nacional. Los docentes transferidos que no reúnan los requisitos exigidos en la jurisdicción receptora, podrán continuar efectuando aportes al sistema nacional de previsión; las jurisdicciones serán agentes de retención de los mencionados aportes.

Sra. Malharro de Torres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: todavía tenemos muy presente la situación previsional que se le creó a los docentes cuando el "proceso" transfirió compulsivamente las escuelas primarias de la Nación. Todavía hay quienes no han logrado su jubilación.

Por eso, señor presidente; no creo que la que voy a enunciar sea la mejor propuesta, pero por lo menos aspiro a que se solucione algún problema. Concretamente, propongo que la redacción de este artículo sea reemplazada por la siguiente: "La Nación transferirá los fondos previsionales aportados por el personal que será transferido. O bien, el acuerdo a que se arribara respecto de la situación previsional del personal a transferir deberá preservar la situación económico-financiera de las cajas previsionales que las distintas jurisdicciones tengan con anterioridad al momento de convenirse la transferencia."

Esta es mi propuesta concreta.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: deseo hacer una observación respecto de este artículo, más bien con el objeto de requerir la opinión de la comisión para que resulte una interpretación que sirva de fundamento para su aplicación futura.

Cuando el artículo dice "A los efectos previsionales, las jurisdicciones receptoras reconocerán los servicios prestados por el personal en el orden nacional", entiendo que se refiere a que los servicios se computan para establecer el monto que, de acuerdo con el sistema de reciprocidad jubilatorio, permitirá que en cada jurisdicción provincial se efectúe el otorgamiento de

la jubilación, pero dejando constancia de que la caja otorgante de la jubilación será la que resulte de cada ley provincial.

Digo esto porque, en el caso del Neuquén, la ley provincial requiere diez años de cómputos de servicios en la caja de la provincia para que ésta pueda ser la otorgante. En otras jurisdicciones puede haber un sistema distinto. Deseo que quede aclarado que esto se refiere al cómputo de servicios para establecer el cuántum, de acuerdo con el sistema de reciprocidad, pero no se relaciona con lo que corresponde a la determinación de cuál va a ser la caja otorgante, ya que eso será definido por cada ley provincial.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: para poder gozar de la jubilación, los docentes transferidos en el orden provincial deben tener diez años de servicios en las provincias. En caso contrario, si tienen menos años se jubilan por las cajas nacionales.

Sr. Trilla. — ¿Dónde figura eso?

Sr. Brasesco. — ¿De dónde surge eso?

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Marín. — Señor presidente: a mi entender, el artículo deja la opción para que el docente transferido elija la caja nacional si reúne los requisitos, o la caja provincial si adecua su trabajo a los requerimientos que exige la cobertura provincial. El artículo, tal como está redactado, contempla la opción para el maestro transferido. Es decir que las condiciones están dadas como para que se opte por una u otra caja, de acuerdo con lo que sea más conveniente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: no soy experta en jubilaciones, pero he aprendido que con diez años de aportes no se obtiene la jubilación. Además, en el costo de la transferencia deben considerarse los aportes previsionales. Porque si no estamos pagando sólo aquello que queremos y el costo más alto lo asumirá el protagonista principal, que es el docente.

Por estas razones solicito que se tenga en cuenta la propuesta que efectuó acerca de que la Nación transfiera los fondos a las cajas para lograr una garantía. Porque pregunto: ¿qué pasa con aquel docente al que le faltan tres años?

Dicen que las provincias serán cajas receptoras. ¡Por favor, no les demos más responsabilidades a las provincias!

Repito que solicito sea aceptada la propuesta que formulo como una garantía para la situación del docente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: las argumentaciones de la señora senadora por Mendoza son totalmente válidas.

Es necesario que el Estado nacional transfiera a las cajas provinciales los aportes previsionales que cada docente efectuó a lo largo de su vida de trabajo.

Debemos entender que cada gobierno provincial — sea por fundamento político o por generosidad para con todo el personal en condiciones de jubilarse — legisle abriendo la posibilidad de que el docente pueda jubilarse a través de las cajas provinciales.

Sigo hablando de lo mío. En La Rioja se transfirieron los docentes nacionales primarios allá por 1969, y quienes se han jubilado por la caja provincial gozan del 82 por ciento móvil, aun cuando perciben magros salarios, sin lugar a dudas son mayores que los de los docentes nacionales.

Es decir que la mecánica que pueda implementarse respecto del dinero que la Nación debe aportar corre por cuenta de los gobiernos provinciales, sobre los que no debemos tener tantas dudas.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: este artículo incluye dos aspectos. El primero es declarativo y reafirma los derechos del docente en cuanto a que las jurisdicciones provinciales o de transferencia reconocerán los servicios prestados por el personal en el orden nacional. Esto no es más que una declaración de reafirmación, porque en el país existe el sistema de reciprocidad y los servicios prestados en cualquier jurisdicción se reconocen en las demás cajas.

Pero la preocupación por el estado de las cajas provinciales aquí manifestada por los señores senadores es legítima, porque el sistema de reciprocidad no está funcionando como corresponde en el país. Cuando las cajas reconocen los servicios para el otorgamiento de una jubilación por otra jurisdicción deben girar los fondos correspondientes según los aportes efectuados por el afiliado para que la caja otorgante goce de la capitalización. Pero por distintas razones, como

por ejemplo los agudos procesos inflacionarios sufridos por el país, en la actualidad esto no se cumple.

Creo que la disposición del último párrafo es injusta. Aquí se le permite al docente transferido seguir aportando a la caja nacional, pero este aporte no es necesario. Porque si ya tiene los años suficientes para la caja nacional se va a jubilar a través de ella, y si no tiene los años suficientes los completará aportando a la caja de la jurisdicción a la que ha sido transferido.

Pero, ¿cuál es la consecuencia inmediata de esta opción del trabajador? Las cajas provinciales no van a recibir estos aportes que corresponden a alguien que está trabajando en su jurisdicción y cobrando el sueldo en ella. Esto de alguna manera puede deteriorar la situación de la caja, que puede verse obligada a otorgar beneficios sin que se hayan realizado los aportes.

Para solucionar el problema de los aportes no transferidos redacté un artículo en el que con toda precisión se establece: "Por los agentes que acepten la transferencia a las cajas de previsión de las respectivas provincias, la Nación transferirá los aportes correspondientes a los mismos por el tiempo de su prestación de servicios. El cálculo se hará en base a la suma de los aportes personales y contribución patronal para jubilación correspondientes al mes de diciembre de 1991 multiplicados por 13 y por los años de servicio respectivos, debidamente aceptados por cada agente. Dicha transferencia se hará efectiva en 60 cuotas mensuales junto con la coparticipación del último día del mes y a partir del mes en que se concrete la transferencia".

Con esta disposición estaríamos preservando los recursos de las cajas provinciales y exigiríamos a la Nación el cumplimiento de la transferencia de los aportes que corresponden y que hayan realizado esos docentes que deban jubilarse por las cajas provinciales.

Sr. Bittel. — Pido la palabra.

Sr. Brasesco. — ¿Estoy anotado, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — Está anotado, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Bittel. — Señor presidente: creo que el asunto se está aclarando, aunque considero que la redacción original es correcta.

Observemos que hay provincias que exigen quince años de aportes, como es el caso del Chaco. Pero aquí se le da una opción al maestro,

de tal manera que me parece correcta la redacción del artículo.

Entiendo que la propuesta del señor senador por San Juan le crea a la Nación una obligación de imposible cumplimiento. ¿Cómo haría la Nación para transferir los aportes que hubieran venido realizando los agentes que tienen, por ejemplo, veinte años de servicios? Teniendo en cuenta los procesos de hiperinflación que ha sufrido el país, me parece que ésta sería una cuenta engorrosa y difícil de realizar. Por eso me inclino por pensar que el artículo está bien redactado y que quedarán garantizados los derechos de los maestros que fueren transferidos a las provincias argentinas.

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos. Luego correspondió que hagan uso de la palabra los señores senadores por La Pampa y por el Chubut.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: indudablemente este artículo 10 provoca dos consecuencias. En primer lugar, traerá gastos de administración a las cajas de jubilaciones de las provincias, ya que se convertirán en agentes de retención y deberán efectuar transferencias a las cajas nacionales. En segundo lugar, el docente tendrá conflictos en el momento de su jubilación.

Lo planteado por el señor senador Posleman pone las cosas en su justo lugar, más allá de que haya posibilidad de opción o no la haya. Indudablemente, una aceptación por parte nuestra de ese planteo no sería del agrado del Ministerio de Economía de la Nación porque tendría que reembolsar los aportes jubilatorios con la actualización monetaria pertinente hasta el día de entrada en vigencia de la ley de convertibilidad, congelándolos de ahí en adelante. Por eso, es atendible la enunciación de las cuotas que expone el señor senador por San Juan.

No podemos manejarnos únicamente con la corresponsabilidad que existe entre las distintas cajas.

El problema de tipo previsional es muy importante no sólo para las cajas de jubilaciones y para el gobierno de la Nación sino también para quien va a obtener su jubilación.

Más allá de nuestro voluntarismo, el artículo 10 tal como está redactado va a traer inconvenientes cuando el docente, sin tener en cuenta la caja por la que haya optado, tenga que presentar el certificado de cese, por la sencilla razón de la transferencia de fondos que se tendrá que hacer.

Aunque duela un poco —estamos hablando de cosas muy serias que hacen a la seguridad social y también a la garantía de los fondos de las cajas provinciales, que sin lugar a dudas en un balance general andan mucho mejor que las nacionales—, la propuesta del señor senador Posleman es atendible, ya que resuelve los problemas. Inclusive, podría hacerse un pequeño agregado que se me ocurre en este momento: "...sin perjuicio de lo que puedan convenir las partes en el acuerdo de transferencia en lo que haga a la modalidad de las cuotas de pago por parte de la Nación a las provincias".

Por otro lado, algo fundamental es que esa transferencia de fondo se tendrá que hacer en australes y no en bonos de consolidación de la deuda previsional o de la deuda interna. Se deben dejar las sesenta cuotas en australes sin perjuicio, si fuese necesario, de que en el convenio pertinente que haga la Nación con las provincias, ratificado por las Legislaturas, pueda ampliarse el plazo que determina este proyecto de ley. De tal manera quedarían resueltos algunos inconvenientes que podría tener el sistema previsional nacional.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Marín. — Señor presidente: debo confesar que no entiendo la modificación propuesta. Si bien se habla de federalismo, según lo que entiendo de la propuesta del señor senador por San Juan se estaría modificando el sistema previsional de las provincias.

De acuerdo con el artículo en consideración, el docente tiene la posibilidad de optar por una u otra caja: lo hará por la de orden nacional —se me ocurre a mí— si le faltan dos años para jubilarse, mientras que de lo contrario deberá hacer los aportes correspondientes y tendrá que adecuarse a lo que cada caja provincial determine. Pero no podrá elegir entre estas dos posibilidades si se modifica el texto del artículo.

Este problema en materia previsional no se planteó en el caso del artículo 9º, vinculado con las obras sociales, que es exactamente igual al que estamos tratando. Allí se le deja la opción al docente para que determine cuál es la obra social que más le conviene. Creo que esta posibilidad de elección es benéfica para el docente y cualquier modificación significaría obligar a las provincias a determinar un régimen especial que tendría que hacerse por ley provincial.

En consecuencia, el artículo 1º se adecua a lo que cada provincia disponga en particular. Así, se le deja la opción al docente para que elija

entre una u otra caja de jubilaciones. La otra forma implicaría limitarlo porque puede haber docentes a quienes les interese la jubilación nacional y no la provincial. Es decir, con la otra opción se deja al docente constreñido en forma exclusiva al régimen previsional provincial.

Señor presidente: en definitiva, creo que este artículo reúne realmente los requisitos necesarios para su aprobación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Benítez. — Entiendo que este artículo está correctamente redactado; está bien que se reconozcan las antigüedades a los efectos previsionales. Pero no es competencia de este proyecto de ley establecer el momento en que se han de efectuar las transferencias de aportes. Ello está señalado expresamente en los convenios de reciprocidad que tienen firmados todas las provincias con el Instituto Nacional de Previsión Social, de acuerdo con el decreto 9.316; no recuerdo si esta norma es de 1944 o 1946. Ese decreto es el que establece la forma y la oportunidad en que deben hacerse las transferencias de aportes jubilatorios.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Quiero contestar el argumento que dio el senador justicialista por el Chaco de que sería engorrosa la transferencia de los aportes previsionales a las provincias en razón de los cambios en el valor de la moneda.

No creo que sea engorrosa puesto que la transferencia debe hacerse a valores actuales; es decir, las jubilaciones que se vayan incorporando al sistema deben ser pagadas a valores actuales.

Mi preocupación sobre este artículo y todo el proyecto de ley está focalizada en la forma como el Poder Ejecutivo, a través de su mensaje, y nosotros, por medio de este dictamen algo atenuado, estamos encarando la transferencia de las escuelas.

Estoy de acuerdo con la transferencia, con la descentralización educativa y con la unificación de criterios en educación en cada provincia. Pero observo —tengo la obligación de advertirlo en este recinto en representación del Chubut— que varias jurisdicciones se van a ver notoriamente perjudicadas con todo este mecanismo, tanto en lo relacionado con el mantenimiento de los servicios educativos como en lo específicamente previsional.

Por ejemplo, la provincia del Chubut ya fue perjudicada en la nueva ley de coparticipación

federal. Hasta 1987 nosotros recibíamos el 2,2 por ciento; ahora percibimos solamente el 1,58 por ciento. También hemos sido perjudicados con la sanción de la ley 23.966. En la actualidad el monto que percibimos por IVA para las jubilaciones es menor que el que recibíamos antes para ese destino.

Entonces, no quiero que mi silencio en cada uno de los artículos que se van aprobando se interprete como una aceptación de mi parte. En general, estoy votando en contra.

También debo decir que la situación financiera del Chubut ya es muy seria, sobre todo ahora que el gobierno nacional ha anunciado que deben continuar los ajustes en el nivel provincial. El Chubut ha hecho los ajustes y realmente se encuentra en una situación deficitaria, de la que no puede salir.

Este es el sentido de mis observaciones y del voto negativo que emitiré para el texto en examen.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10, conforme con la redacción propuesta por la señora senadora por Tucumán.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 11.

Sra. Rivas. — Sin modificaciones que proponer.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

Artículo 11. — El personal docente transferido continuará en la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente; el gobierno de la jurisdicción receptora actuará como agente de retención de los aportes.

Sra. Malharro de Torres. — Que conste nuestro voto en contra.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 12.

Sra. Rivas. — Sin modificaciones que proponer.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

Artículo 12. — Las cuestiones disciplinarias referidas al personal transferido suscitadas hasta el momento de efectivizarse la transferencia, serán resueltas según la normativa vigente al momento de ocurrir los hechos que las motivaron y en la jurisdicción de origen en un plazo no mayor de un año con posterioridad a la firma del con-

venio; las jurisdicciones receptoras aplicarán las sanciones y/o medidas que la jurisdicción de origen hubiera resuelto.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 13.

Sra. Malharro de Torres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Para referirse a qué artículo, señora senadora?

Sra. Malharro de Torres. — Es para proponer un nuevo artículo 13, que pido se incorpore a continuación del 12.

Sr. Presidente (Menem). — Primero vamos a considerar el artículo 13 tal como figura en el dictamen y luego la señora senadora hará su propuesta.

Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — En el artículo 13 hay modificaciones. Pido que se lea.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Prosecretario (Fassi). — (Lee)

Artículo 13. — Los concursos de docentes a ser transferidos, así como también los procedimientos de traslados, titularizaciones y jubilaciones, pendientes de resolución que pudieren existir al momento de promulgarse esta ley, deberán ser resueltos según la normativa de origen con el alcance y en tiempos y modos que establezcan los respectivos convenios bilaterales.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Tal como anuncié cuando se estaba tratando cómo afectaban a los docentes las condiciones de las transferencias, propongo que después del artículo 12 se intercale el siguiente artículo: "Por la presente ley se dispone la titularización inmediata del personal que quede sujeto a la transferencia, cualquiera sea su cargo y situación de revista, en tanto cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto del Docente".

Señor presidente: el sentido de este artículo es que la transferencia actúe de por sí como un hecho de titularización. Porque todos sabemos —y no podemos engañarnos— lo que va a pasar con las escuelas cuando lleguen a la jurisdicción provincial. Ya estamos viviendo algunas situaciones en las provincias. Por eso pido que se ponga a votación este artículo que debería intercalarse entre el 12 y el 13.

Sr. Presidente (Menem). — Estamos considerando el artículo 13.

Sra. Malharro de Torres. — Ya se votó.

Sr. Presidente (Menem). — Lo estamos considerando; no se votó aún. ¿Usted propone su artículo en sustitución del actual?

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Malharro de Torres. — Por eso pedí la palabra ni bien se votó el artículo 12, porque ahí era donde correspondía colocar este artículo 13, que pido que se vote.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Comprendo la inquietud planteada por la señora senadora por Mendoza, que tiene sus fundamentos válidos. Pero de esa manera estaríamos coartando la libertad a otros docentes que aspirarían a cargos directivos —por así decirlo— o a la titularización por horas que están cubriendo suplentes. Para eso existe la junta de clasificación que establece el orden de méritos. No creo que sea tan así el hecho de que estén pasando cosas. Se trata de temores que lógicamente emergen de la posición de los docentes. Aquí hay junta de clasificación, repito, que determina un orden de méritos, tanto para cargos directivos como para cargos docentes, en las distintas modalidades que la realidad nos impone.

Si puntualizáramos por ley la titularización estaríamos desvirtuando la calificación que las juntas realizan para cada docente. No podemos estar pensando que la política vaya a meter la cola en esta situación.

Pero quien utiliza la política para seguir agrediendo con manifestaciones de que esto significa una vejación a la persona del docente, está hablando a las claras de la chatura moral del gobernante. Y por eso existen los resortes legislativos y judiciales para buscar amparo cuando se violan los derechos.

Sr. Brasesco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Vamos a someterlo a votación . . .

Sra. Malharro de Torres. — No someta nada a votación.

Por favor, solicito el uso de la palabra porque no puedo aceptar las cosas que se están diciendo.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — En este proyecto el docente ha sido un anónimo.

Así lo señalé cuando fundamenté el dictamen; no quise reiterar dichos conceptos en esta se-

sión. Pero me parece que me equivoqué; y por eso lo vuelvo a decir ahora.

El docente es un pobre elemento que es transferido, llevado . . .

Sr. Sánchez. — No es un pobre elemento.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia ruega al señor senador por La Rioja que no dialogue.

Sra. Malharro de Torres. — Le ruego que no me interrumpa, señor senador. Yo lo dejé hablar a usted.

Me imaginé que esto se iba a producir. Los senadores debemos garantizar la estabilidad con este acto que es fuerte, lo reconozco. Pero se lo debemos a la docencia argentina. ¿Quién no puede decir que en su provincia los docentes no están montando ya el quiosquito diciendo que sus pares nacionales no han rendido concurso, que no tienen este o aquel requisito? ¡Pobres! Serán atropellados, y no quiero que eso suceda.

Sr. Sánchez. — No se lo vamos a permitir bajo ningún concepto.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: quiero poner en su justo lugar la cuestión que se ha suscitado. No es un problema traído de los cabellos el planteo de la titularidad de quienes están en condiciones de acceder a ella de acuerdo con la legislación vigente en el momento en que se realice la transferencia.

Tenemos el ejemplo y la experiencia de la transferencia de las escuelas primarias, que provocó serios inconvenientes a las administraciones provinciales, y a raíz de ello en más de una oportunidad los docentes fueron puestos en disponibilidad.

La propuesta formulada por la señora senadora por Mendoza tiene la virtud de ser una cláusula operativa. Porque hacemos la transferencia y simplemente garantizamos el derecho a la titularidad de quienes se encuentren encuadrados en las normas legales para ser tales. Teniendo presente esta transferencia y sabiendo la cantidad de interinos y suplentes que revistan en cada establecimiento, esto no quita, aun cuando queramos evitar problemas, que se puedan plantear cuestiones en los concursos para nombrar titulares a quienes ocuparán esos cargos luego de realizada la transferencia.

Esto tiende a evitar los problemas que ya sufrimos en las administraciones provinciales y a asegurar un derecho que si bien es adquirido todavía no está consagrado en los establecimientos

nacionales, en los que el interinato ha sido una especie de modo de vida del docente.

El actual ministro de Cultura y Educación me jubiló de oficio. Desde que inicié mi carrera docente hasta el momento en que me enviaron el telegrama de cese en el servicio para acogerme a la jubilación, fui interino.

Esta calidad de interino en el orden nacional, especialmente en el CONET, es un estado permanente.

La modificación propuesta por la señora senadora por Mendoza trata de resolver este problema. Estamos totalmente de acuerdo con el artículo 13 tal como figura en el dictamen; no queremos su sustitución. Lo hacemos simplemente para evitar problemas que se trasladarán a las provincias y respecto de los cuales la Nación se lavará totalmente las manos.

Por otra parte, es un acto de justicia real y concreto. Si transferimos los bienes inmuebles, muebles y todos los bienes fiscales limpios de cualquier problema de tipo jurídico y aquellos docentes que están en condiciones de ser titularizados de acuerdo con las normas vigentes, esta ley será operativa y automáticamente los convertirá en tales.

Esto no significa invadir la jurisdicción nacional ni reemplazar desde ningún punto de vista las distintas normas que acerca de la carrera docente existen en las diferentes provincias. Hay que dar al docente la tranquilidad de una titularidad que todavía no ha sido consagrada y a la cual tiene derecho. Y hay que evitar que las provincias tengan conflictos y problemas de tipo jurídico que después tengan que llevar sobre sus espaldas.

Ese es el alcance, señor presidente, y no otro.

Sr. Presidente (Menem). — Por tratarse de un nuevo artículo, se va a votar primero ese artículo nuevo propuesto por la señora senadora por Mendoza, que iría a continuación del artículo 12.

— La votación resulta negativa.

Sr. Brasesco. — Que quede constancia, señor presidente, de que ésta es la única votación que he hecho por la afirmativa, porque voté por la negativa en general.

Sr. Solari Yrigoyen. — Yo también, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Queda constancia, señores senadores.

Se va a votar el artículo 13 con las modificaciones propuestas.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 14.

Sra. Rivas. — Señor presidente: el artículo 14 es el primero del capítulo IV, que se refiere al financiamiento.

Solicito que se lean por Secretaría los artículos 14 al 17, ya que todos ellos han sido modificados.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a leer el artículo 14 en primer término.

Sr. Posleman. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Primero se va a leer el artículo 14 y después voy a concederle el uso de la palabra.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

CAPÍTULO IV

Del financiamiento

Artículo 14. — A partir del 1º de enero de 1992 y hasta tanto se modifique la ley 23.548 la Secretaría de Hacienda de la Nación retendrá de la participación correspondiente a las provincias en el régimen de la citada ley, previamente a la distribución secundaria, un importe equivalente al monto total, que se incluye en la planilla anexa I, con detalle para cada jurisdicción, con destino al financiamiento de los servicios educativos que se transfieren por la presente ley y los correspondientes al costo de servicios de hospitales e institutos nacionales, políticas sociales comunitarias y programa social nutricional a transferir a las provincias según se convenga oportunamente.

Dicha retención será operativa en la medida que el incremento de la recaudación de los gravámenes a que se refiere la ley 23.548 para 1992 respecto del promedio mensual anualizado del período abril-diciembre de 1991 sea superior al monto mencionado en el párrafo anterior.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: había pedido la palabra porque quería hacer algunas consideraciones generales sobre el capítulo que estamos tratando, que habla del financiamiento de la transferencia de los servicios educativos a las provincias.

Me veo en la obligación de hacer consideraciones generales sobre este capítulo porque advierto que el despacho de comisión modificado ha sufrido una transformación bastante notable.

En primer lugar, en la primera reunión —que surgió como propuesta de los señores senadores— con los gobernadores electos se analizó este tema en profundidad y se arribó a algunos acuerdos que han sido plasmados en este proyecto y sobre los que quiero formular algunas observaciones.

Deseo que quede expresamente aclarado el sentido de mi voto y para ello voy a ser muy breve, señor presidente.

Durante la consideración en general expresé que estábamos en favor de la transferencia, que creíamos que era útil para el país y para la educación. También manifesté mi preocupación respecto de los recursos con que iba a sostenerse la educación en las provincias en razón de que, como han expresado otros señores senadores, a pesar del aumento de las alícuotas de la coparticipación, hasta este momento la gran mayoría de las provincias tienen déficit y están desfinanciadas en una parte. Es decir que la situación de las provincias deja, por lejos de ser floreciente, y también, por lejos no están en condiciones de atender sus propias responsabilidades.

Ahora bien, nuestra propuesta de que la Nación hiciera un esfuerzo transfiriendo parte de sus recursos para que las provincias pudieran atender los servicios no ha sido aceptada por el Poder Ejecutivo nacional.

Se han dado innumerables razones a las que no voy a hacer referencia aquí. Tampoco las voy a repetir. Simplemente quiero expresar como conclusión que con la transferencia tal como se va realizar y con el sistema de financiamiento previsto realmente no le vamos a hacer bien al país. La educación en las provincias va a sufrir un deterioro, y en muy corto plazo habrá dificultades provocadas por huelgas y falta de financiamiento.

Sería largo de explicar, pero simplemente lo que se garantiza con la cláusula gatillo de financiamiento es un mínimo salarial que existe a esta fecha, y sabemos positivamente que el incremento del gasto será mucho mayor que ese mínimo salarial garantizado.

Como el gobernador electo de mi provincia participó de esa reunión y ha aceptado la propuesta nacional, creo que es mi obligación como senador que la representa, dejando a salvo mi opinión personal y la de mi partido acerca de la conveniencia de esta transferencia o no, acatar lo que el gobernador ha aceptado, con la confianza que él tiene en cuanto a que se van a poder de alguna manera racionalizar los gastos de la provincia para atender estos servicios.

En consecuencia, daremos nuestro voto afirmativo a esta iniciativa, proponiendo que se desdoble la planilla anexa en dos partes. Es decir, que la planilla anexa 1 sea transformada en planillas anexas 1.A. y 1.B. En la parte de la planilla anexa 1.A. deben incluirse exclusivamente los montos correspondientes a las provincias hasta donde se refiere a los totales parciales y al total general, concluyendo allí dicha planilla. Y quedaría para la planilla anexa 1.B. la mención de los recursos correspondientes a la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires y a Tierra del Fuego.

Explicaré el sentido de esta propuesta porque seguramente algunos señores senadores no entenderán a dónde apunto con ello. Tal como está redactado el artículo 14 resultará que la Nación va retener el monto total de la planilla anexa 1 de la parte que corresponde a las provincias. Esto significa que van a ser ellas las que financien el gasto correspondiente a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta este momento se hace según lo dispuesto por la ley de coparticipación federal; es decir, se financia con el aporte que efectúa la Nación con la parte correspondiente a recursos. No participa junto con las provincias, sino que lo hace con la parte de recursos correspondientes a la Nación.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Luis A. J. Brasesco.

Sr. Posleman. — De esta manera, al incluirlo dentro de esta planilla, las provincias estaríamos haciendo el aporte indirectamente para el costo de financiamiento, que no es despreciable ya que asciende a 249 millones de dólares o de pesos del año 1992.

Esta propuesta se complementaría con una aclaración, agregada al final del artículo 17: "... sin afectar la participación de las provincias, según la ley 23.548."

Los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, con quienes hemos estado analizando y debatiendo este tema, han expresado que con estos fondos de las provincias no se intenta financiar lo que corresponde a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el texto de este artículo no es claro y entendemos que en la preservación de la integridad de los recursos provinciales, aun aceptando esta dura carga que significa la transferencia, debemos ser muy celosos y precisos para evitar que este posible aumento de la coparticipación no sea menoscabado por la sustracción de esa masa coparticipable de los fondos que corresponden a las provincias.

Dejo así expresada mi propuesta.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

La Presidencia aclara a los señores senadores que ha confeccionado una lista de oradores, según el turno en que han solicitado el uso de la palabra.

Sr. Solana. — ¡Señor presidente: había solicitado con mucha anterioridad el uso de la palabra!

Sr. Presidente (Brasero). — No lo había observado, señor senador. Ruego entonces al señor senador por la Capital...

Sr. Vaca. — Si fue así, no tengo inconveniente alguno.

Sr. Presidente (Brasero). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: seré muy breve, ya que en gran medida comparto las consideraciones formuladas por el señor senador por San Juan.

Según el artículo 14, la Nación retendrá previamente a la distribución secundaria un importe equivalente al monto total de los gastos que figuran en la planilla anexa —gastos a transferir por jurisdicción—, con destino al financiamiento de los servicios transferidos.

Esta retención operará si la recaudación de impuestos coparticipables para 1992 es superior respecto de la del corriente año.

Que se haya hecho referencia a los gastos que actualmente tiene la Nación por estos servicios implica que no se tienen en cuenta los gastos reales en que incurrirán las provincias, como por ejemplo las escalas salariales, que ellas son distintas de las que rigen actualmente en el orden nacional. En efecto, los salarios de los docentes en las provincias son mayores, por lo que inevitablemente se crea un conflicto inicial que sin dudas planteará el personal transferido, y si se dispone la equiparación de haberes, esa diferencia resultante estará exclusivamente a cargo del presupuesto provincial.

El ministro Cavallo ha sido muy claro y explícito en la reunión con los gobernadores cuando afirmó que el Estado nacional no reconocerá a los transferidos nacionales monto salarial alguno superior a los que actualmente perciben. De manera que cualquier aumento salarial posterior necesariamente tendrá que correr por cuenta de las provincias.

Además, existirán gastos administrativos adicionales para la supervisión y control de la mayor cantidad de servicios. La Nación cuenta con una estructura administrativa que no transfiere, y las provincias en cambio deberán incrementar las suyas para poder asimilar el mayor número de establecimientos, personal docente y no docente y demás obligaciones a atender.

Veamos los gastos necesarios para poner en condiciones los establecimientos transferidos. Estamos hablando del traspaso de 2.141 establecimientos y 82.465 agentes docentes y no docentes para el total de las jurisdicciones, correspondiéndole al Neuquén cuarenta estableci-

mientos y 805 agentes. Esto representa un volumen significativo que parece no tenerse en cuenta al momento de analizar los problemas que afrontarán las provincias.

Este artículo 14 hace referencia a la planilla anexa 1. En ella aparecen agregadas la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego. Esto crea dudas, por cuanto no se define si los gastos de estas jurisdicciones intervienen en los cálculos para aplicar el artículo en cuestión.

De ser así, las provincias intervinientes en la coparticipación federal estarían aportando con recursos propios para atender esos gastos que indudablemente, en el caso de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta ahora en la gobernación de Tierra del Fuego, corresponden exclusivamente a la Nación.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Solana. — El Consejo Federal de Inversiones, a solicitud del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha realizado un estudio del estado de conservación de los establecimientos a transferir, el que arrojó como resultado la necesidad de fondos por un total de 241 millones de dólares, lo que representaría para la provincia del Neuquén un costo de 2,4 millones de dólares, aproximadamente. Por estos motivos, propongo como agregado al artículo 19 el siguiente texto: "El Poder Ejecutivo nacional deberá asignar un monto global para reparaciones de los edificios transferidos, cuyo estado de conservación o antigüedad afecte el normal desenvolvimiento del servicio educativo. Los montos y la forma de pago de dichas reparaciones deberán determinarse en los respectivos convenios, con la intervención de peritos idóneos e independientes"

Sr. Presidente (Menem). — Estamos considerando el artículo 14, señor senador.

Sr. Solana. — Sí, señor presidente. Dejo propuesto ese agregado para el momento en que se considere el artículo 19.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca. — Señor presidente: quiero referirme a la propuesta del señor senador por San Juan.

Seguramente, el señor senador tiene sus razones para manifestar tanta susceptibilidad. Pero creo que del texto propuesto por las comisiones no se derivan las conclusiones que extrae

el señor senador por San Juan. En el artículo 17 se establece un régimen especial para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y para la nueva provincia de Tierra del Fuego. Además, este texto no sólo guarda coherencia interna sino también con otros textos legales, como la ley de coparticipación.

Es claro que hay un régimen distinto para las provincias que figuran en la primera parte de la planilla anexa, que están regidas por los artículos 3º y 4º de la ley de coparticipación, a diferencia de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la nueva provincia de Tierra del Fuego, que están regidas por el artículo 8º.

De todos modos, como lo que abunda no daña, y para mayor seguridad de cada una de las provincias, recomiendo a la comisión que acepte la propuesta formulada por el señor senador por San Juan con relación al artículo 14, y que también acepte oportunamente el agregado que propusiera al artículo 17.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital, de la bancada radical.

Sr. Trilla. — En este caso tengo la misma opinión que mi colega por la Capital, aunque diferimos en el tema del Concejo Deliberante. La ley 23.548, de coparticipación federal, es bien clara. En un artículo se define cómo es la distribución secundaria que identifica a cada una de las provincias, y lo que se refiere a la Capital está en el artículo 8º. Quiere decir que hay una diferenciación bien concreta en la ley marco, donde se rige el modo de coparticipación de los impuestos.

En consecuencia, a mi criterio el artículo 14 está perfectamente redactado, porque lo que se refiere a la Capital Federal y a Tierra del Fuego está en el artículo 17, que se acaba de mencionar.

Por otra parte, no tengo ningún inconveniente en que el anexo se divida en el ordenamiento de las provincias, y a posteriori de la Capital Federal y Tierra del Fuego. Quería mencionar esto para que no haya confusiones en la interpretación de la ley aprobada en 1988.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: es evidente que por la forma como se redactó inicialmente este artículo, incluso con las modificaciones proyectadas, la transferencia de los servicios va a significar para el conjunto de las provincias una disminución en su coparticipación relativa dado el peso que tiene la provincia

de Buenos Aires en virtud de la cantidad de servicios que se le transfieren.

No puedo dejar de desconocer la presunción optimista efectuada por el señor ministro de Economía al decir que habrá aproximadamente dos mil millones de dólares que se añadirán al Tesoro en virtud de una mejora en la recaudación impositiva. Desearía fervientemente que esto fuera así, no obstante que algún informe que hace dos días publicó un periódico en materia económica pone en tela de juicio esa predicción, por cuanto allí se indicaba que la recaudación no iría de acuerdo con las previsiones. De todas maneras deseamos profundamente, por beneficio propio, que esto ocurra.

Si no he interpretado mal las explicaciones dadas, parecería que lo que buscan los autores del proyecto es que los mayores ingresos que se estima provendrán de los recursos coparticipables sean aplicados por las provincias para afrontar los nuevos gastos y obligaciones que asumirán como consecuencia de la transferencia. Es decir, se trataría de que el esperado aumento de los ingresos sea aplicado por las provincias a las nuevas obligaciones y que ellas participen activamente en el reajuste de sus presupuestos en función del esfuerzo a nivel nacional que se realiza con igual objetivo, o sea en la búsqueda de la estabilidad monetaria. Esta es mi interpretación.

O sea, las provincias estarían haciendo un nuevo aporte en favor del objetivo señalado, de la misma manera en que hoy aceptan los efectos negativos que trae aparejada la apertura económica en las economías locales por la reducción de costos y por la mayor competitividad.

Ahora bien, queda un interrogante vinculado con las limitaciones expresadas por el señor senador Posleman. La forma de subsanarlo sería la llamada "cláusula gatillo" que se explicita en el artículo 15.

Hago estas pequeñas observaciones —no obstante haber sido calificada como un exceso de susceptibilidad la prevención formulada por el señor senador por San Juan, y a pesar de que no deja de ser loable la defensa que dos senadores de bloques opuestos han efectuado en relación con el distrito que dignamente representan—, porque nosotros también tenemos que tomar precauciones con relación a lo que —vuelvo a decir— para nuestra provincia no deja de significar un problema. Creo que lamentablemente será así cuando se cotejen las cifras finales de lo que resulta este nuevo régimen que se proyecta con el que teníamos de acuerdo con la ley 23.548.

Entonces, lógicamente tenemos que buscar los recaudos que eviten que esta mengua en nuestra participación relativa no resulte mayor. Por tal razón dejo expresado mi apoyo a lo que acaba de solicitar el señor senador por San Juan.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a llamar para formar quórum.

— Así se hace.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Quiero pedir una aclaración al señor senador Posleman. ¿Usted propone que después de la planilla anexa 1 se diga que la Nación retendrá el monto total de la planilla anexa 2?

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Al hablar con los funcionarios del Poder Ejecutivo se señaló que no hay intención de que se incorpore ese tema en la forma que se ha indicado. Hemos buscado otra alternativa para aclarar cuáles son los fondos que deben considerarse.

Habría que desdoblar la planilla de esta manera: Anexo 1 "A" y Anexo 1 "B", para que quede claro que lo que se puede retener es el monto de la planilla Anexo 1 "A", sin hacer ningún otro agregado porque esos funcionarios nos expresaron que no es conveniente.

Sr. Trilla. — Está bien.

Sr. Brasesco. — Es correcto.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Acepto la modificación que propone el señor senador por San Juan.

Sr. Presidente (Menem). — En consecuencia, si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 en la forma propuesta por la señora senadora por Tucumán con la modificación propiciada por el señor senador por San Juan, que ella acepta.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 15.

Sra. Rivas. — Que se lea el texto de este artículo.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

Artículo 15. — Cuando el monto mensual recaudado no alcanzara a cubrir el nivel promedio mensual del período abril-diciembre de 1991, el gobierno nacional cubrirá totalmente y en forma automática el costo mensual de los servicios transferidos.

Si al cierre de cada mes lo recaudado fuera superior al nivel promedio abril-diciembre de 1991 pero no alcanzara a cubrir el costo de los servicios el gobierno nacional financiará automáticamente la diferencia.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital, bloque radical.

Sr. Trilla. — Quiero comentar algo sobre este artículo que fue motivo de una gran preocupación por parte de los señores senadores de mi bancada a lo largo de las distintas reuniones que hemos tenido con las autoridades del Poder Ejecutivo, tanto con el ministro de Economía, con el secretario de Educación como con sus respectivos asesores. Me refiero a los encuentros realizados en el Senado y al que se hizo en la Casa de Gobierno, cuando asistieron los señores gobernadores precisamente a pedido de los senadores radicales.

Este artículo se refiere a la garantía que tienen las provincias de que ante el supuesto de cualquier alteración de ingresos en los impuestos coparticipables sea cubierta por el Tesoro nacional. Esta cláusula es realista porque en el supuesto de que no haya ningún incremento en materia de recaudación impositiva, el Tesoro nacional cubriría la totalidad de los servicios. Este fue uno de nuestros esfuerzos para lograr esta situación. He dicho públicamente que la cifra de dos mil millones de dólares de exceso me da la sensación de ser un tanto voluntarista.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital, de la bancada justicialista.

Sr. Vaca. — Señor presidente: voy a proponer una breve corrección gramatical. En el primer párrafo, donde dice "alcanzara" debe decir "alcanzare" y en el segundo párrafo, donde dice "fuera" debe decir "fuere".

Sr. Brasesco. — Diez en castellano. (Risas.)

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15 con las correcciones gramaticales propuestas por el señor senador por la Capital, bancada justicialista.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 16.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

Artículo 16. — Al momento de efectivizarse la transferencia de los servicios prevista en el artículo 14 se transferirán en las proporciones correspondientes los recursos afectados según el párrafo primero de dicho artículo a la respectiva provincia y por hasta los montos mencionados en el mismo.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 17.

Sr. Secretario (Flombaum). — *(Lee)*

Artículo 17. — El Poder Ejecutivo nacional deberá fijar el marco general y los criterios particulares a seguir a efectos de brindar un tratamiento equivalente a lo dispuesto por los artículos 14, 15 y 16 de la presente, a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con anterioridad a la firma del convenio previsto en el artículo 2º de esta ley.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — En este artículo hay que hacer una corrección.

A continuación del texto leído por Secretaría debe decir: "Ello, sin afectar la participación de las provincias según la ley 23.548".

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: a mí no me preocupa ese agregado, pero quiero dejar aclarado que está de más como consecuencia precisa de las disposiciones de la ley 23.548, según la cual la Capital Federal y la provincia de Tierra del Fuego tienen otro régimen. Nada afecta en absoluto la distribución secundaria que prevé el régimen del artículo 4º de esa ley.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: entiendo las explicaciones que ha dado el señor senador por la Capital de que esto es un exceso de susceptibilidad poner de una forma expresa y bien explícita que no se afectan los fondos de las provincias. Pero también les pido que comprendan que las provincias a través del tiempo han venido sufriendo y luchando en el ámbito de la Comisión Federal de Impuestos. En cuanto a las distintas interpretaciones que siempre ha hecho la Secretaría de Hacienda sobre los fondos de coparticipación, nunca han sido favorables a las provincias sino perjudiciales.

Por esta razón, a pesar de que el régimen está perfectamente explicitado, es mi intención que no quede ninguna duda acerca de cuál es la interpretación que da este cuerpo a la sanción de este proyecto con relación a que el financiamiento relacionado con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego debe hacerse con recursos correspondientes a la Nación y no a las provincias.

Ese es el sentido, y por ello pedimos que quede expresado de esta manera.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Manifesté lo anterior porque quiero dejar sentado mi criterio: considero que este término es redundante, pero no me preocupa, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 17 con la modificación propuesta por la señora senadora por Tucumán.

—La votación resulta afirmativa.

—Se cita el artículo 18.

Sra. Rivas. — Proponemos una nueva redacción para este artículo. Solicito que se le dé lectura.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flombaum). — *(Lee)*

Artículo 18. — Las obras públicas que se encuentren en ejecución con destino a los servicios a transferir, serán continuadas y finalizadas por la Nación. A su término dichos inmuebles serán transferidos a la jurisdicción en los términos de la presente ley.

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Este proyecto de ley, como lo señaló el señor senador por la Capital, del justicialismo, tiene muchos defectos de redacción. Por ejemplo, en el artículo 16, se dice "Al momento de efectivizarse la transferencia..." cuando en realidad se quiso decir "al momento de efectuarse la transferencia..."

En el artículo 18 se hace referencia a "Las obras públicas que se encuentren en ejecución con destino a los servicios a transferir...". Entiendo que aquí se quiere hacer referencia a obras públicas que se encuentren en ejecución en los servicios a transferir. Por todas estas razones, quiero pedirle a la señora senadora que permita la corrección de estos errores de redacción.

Sra. Rivas. — Acepto la modificación.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18 con las modificaciones propuestas por la señora senadora por Tucumán y por el señor senador por el Chubut.

—La votación resulta afirmativa.

—Se cita el artículo 19.

Sra. Rivas. — Proponemos una modificación en este artículo. Solicito que se le dé lectura.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flombaum). — (*Lee*)

Artículo 19. — El Poder Ejecutivo nacional, podrá asignar un monto global para reparaciones de los edificios transferidos cuyo estado de conservación o antigüedad afecte el desenvolvimiento del servicio educativo.

Sr. Brasesco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Sin perjuicio de haber votado en contra en general y hasta ahora en particular, debo señalar que recibí un pedido del señor gobernador electo de la provincia a la que represento por el que solicita que la palabra "podrá", que figura a continuación de "El Poder Ejecutivo nacional", sea reemplazada por "deberá". Esto se basa en que el vocablo "podrá" es facultativo y el término "deberá", imperativo.

Por lo expuesto, propongo esta modificación cuya solicitud me hiciera llegar —reitero— el señor gobernador electo de la provincia de Entre Ríos.

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Que hace suya?

Sr. Brasesco. — Así es; por eso la formulo.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: coincido con la propuesta formulada por el señor senador por Entre Ríos, pero deseo ampliarla.

Llamo especialmente la atención de los señores senadores respecto del contenido de este artículo. Hace unos instantes mencioné —quizás en forma un poco inoportuna— que el Consejo Federal de Inversiones realizó, a solicitud del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación una investigación respecto del estado de conservación de todos los establecimientos que se transferirán, que arrojó un resultado de tremenda importancia.

Poner en buen estado la totalidad de los establecimientos demandaría un monto de 241 millones de dólares. Solamente Neuquén, que recibirá cuarenta establecimientos, tendría que invertir aproximadamente dos millones cuatrocientos mil dólares.

Dejar esto librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo resulta realmente inaceptable por cuanto las provincias no estarán en condiciones económicas de adecuar los establecimientos a las verdaderas necesidades; menos

aún podrán hacerlo las provincias que anualmente ven incrementadas sus matrículas, por lo que necesariamente tienen que ampliar sus establecimientos.

Por los motivos expuestos, en sustitución del texto del artículo que ha sido leído por Secretaría, propongo la siguiente redacción: "El Poder Ejecutivo nacional deberá asignar un monto global para reparaciones de los edificios transferidos cuyo estado de conservación o antigüedad afecte el normal desenvolvimiento del servicio educativo. Los montos y la forma de pago de dichas reparaciones deberá determinarse en los respectivos convenios con la intervención de peritos idóneos independientes".

Esta es la propuesta que formulo en sustitución de este artículo.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — No creo que la discusión acerca de si la palabra adecuada es "deberá" o "podrá" sea la más conveniente, ya que esto configura algo que queda sujeto a discusión en el convenio y en el presupuesto. Si cambiamos "podrá" por "deberá", tendríamos que agregar al final una frase que diga: "de acuerdo a lo que en los convenios se asigne". De lo contrario, sería una olbigación de monto determinado, que por razones presupuestarias es incorrecto establecer.

Entonces, si queremos hacer algo que tenga utilidad, deberíamos remitirlo al convenio a que se refiere el artículo 2º.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca. — Señor presidente: entiendo que en el curso del debate hemos olvidado la norma del artículo 2º, ya aprobada, que establece que antes de efectuarse la transferencia deberá celebrarse un convenio entre la jurisdicción receptora y la Nación.

Si ponemos la palabra "deberá" la pregunta que surge de inmediato es cuánto es el monto global en cada caso para que un edificio recupere un estado de conservación y novedad —digamos así en oposición a antigüedad— que le permita prestar adecuadamente los servicios educativos.

Esta es una discusión inacabable en el texto de una ley. Si creo que puede ser materia de discusión en el convenio respectivo.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: coincido totalmente con lo expuesto por el señor senador por la Capital Federal en cuanto a que el artículo

2º prevé la existencia de convenios. Así, todas las particularidades que no figuren en esta ley podrán estar en los respectivos convenios.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Señor presidente: me parece importante lo que proponen los señores senadores por Entre Ríos y por el Neuquén.

He conversado con un diputado nacional perteneciente al recientemente electo bloque justicialista que fue funcionario nacional y que por esa razón recorrió la provincia de Buenos Aires. Representa a la provincia de Buenos Aires y conoce el estado calamitoso en que se encuentran muchas escuelas de mi provincia.

El hecho de que diga "podrá", a pesar de lo que establece el artículo 2º, no significa que el gobierno nacional se vea obligado a discutir este tema. En cambio, si se utiliza la palabra "deberá" se va a ver obligado a discutir con los gobiernos provinciales.

En tal sentido, señor presidente, apoyo lo propuesto por los señores senadores por el Neuquén y por Entre Ríos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: la sustitución de la palabra "podrá" por "deberá" no es antojadiza.

Si se pone el término "podrá", significa que el Poder Ejecutivo nacional tiene una facultad que es optativa, que la podrá ejercer o no ejercer, porque el marco jurídico para el convenio es la ley. La ley es la que da el marco jurídico para convenir.

No me opongo a que el monto global figure en el convenio; pero sí quiero que la asignación de ese monto sea imperativa, de modo que el gobierno de la Nación deba asignar un monto global.

El monto global se fijará entonces en el convenio. Que quede expreso que se fijará en el convenio y que será algo delegado, sin perjuicio de los estudios que ha hecho el Consejo Federal de Inversiones.

La Nación tiene la Dirección de Arquitectura Escolar y las provincias tienen sus direcciones de arquitectura, que pueden llegar a conciliar montos determinados que figuren en el convenio. Pero en la ley la asignación tiene que ser imperativa.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: quiero apoyar el pedido formulado por los

señores senadores por Entre Ríos y por el Neuquén porque creo que esta obligación que asume el gobierno nacional de entregar los edificios en condiciones —o de ponerlos en condiciones si no lo están— tiende a atenuar los efectos financieros perniciosos que tiene este proyecto para las provincias, efectos a los que ya he hecho referencia.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: veo la posibilidad de usar la forma imperativa. Para no perturbar los mecanismos de la realidad económica, sugiero que se agregue como párrafo final "de acuerdo con lo que se establezca en el respectivo convenio". Es decir, dejamos margen para que la Nación y las provincias vean cuál es la situación de los colegios, y entonces quedaría el "deberá". Y en cada caso particular existirá el convenio correspondiente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: someto a la consideración de los señores senadores la siguiente redacción: "El Poder Ejecutivo nacional asignará un monto global para reparaciones de los edificios transferidos cuyo estado de conservación o antigüedad afecte el desenvolvimiento de los servicios educativos. Los montos serán acordados en los respectivos convenios bilaterales".

Sr. Romero. — Es lo mismo. Está bien.

Sr. Gass. — Está bien.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19 con la modificación propuesta por la señora senadora por Tucumán.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 20.

Sra. Rivas. — Señor presidente: para el capítulo V, referido a los aspectos pedagógicos, no hay modificaciones. Solicito que sea leído el artículo 20.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría de leerá el artículo 20, tal como figura en el dictamen.

Sr. Prosecretario (Fassi). — (Lee)

Artículo 20. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, definirá las políticas y estrategias del sistema educativo nacional, en consulta permanente con el Consejo Federal de Cultura y Educación, y coordinará, compatibilizará y evaluará el funcionamiento interjurisdiccional.

Sra. Malharro de Torres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: el Congreso de la Nación es el que determina las políticas y no el Poder Ejecutivo nacional. Propongo que se tache la expresión "las políticas" y quede "definirá las estrategias del sistema educativo nacional". Si no, estamos avanzando sobre un derecho privativo del Congreso de la Nación, que es el que fija las políticas educativas.

No voy a decir como el señor senador Gass, "no soy abogado" . . . *(Risas.)*

Sra. Rivas. — Acepto, señor presidente.

Sra. Malharro de Torres. — ¿Acepta?

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: creo que no corresponde eliminar el término "políticas" y que tendría que decir "ejecutará las políticas y estrategias del sistemas educativo". Las ejecuta a través de las disposiciones del Congreso. Es decir, correspondería cambiar "definirá" por "ejecutará", pero no hay que eliminar el término "políticas".

Sra. Malharro de Torres. — Acepto.

Varios señores senadores. — Está bien.

Sra. Rivas. — De acuerdo.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 20 con la modificación propuesta.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 21.

Sra. Rivas. — Para este artículo no hay modificaciones. Solicito que sea leído.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 21.

Sr. Prosecretario (Fassi). — *(Lee)*

Artículo 21. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, en ejercicio de su competencia, realizará el análisis, evaluación y seguimiento de la situación educativa; de la consistencia, congruencia y calidad educativas de los planes y programas en la materia en relación con las prioridades establecidas; brindará asistencia técnica y financiera para el desarrollo de estrategias y programas educativos; atenderá y gestionará los asuntos de naturaleza internacional que se relacionen con la educación y la cultura; determinará los requerimientos y condiciones para el reconocimiento de títulos y certificados nacionales y extranjeros; organizará y administrará un sistema de información cualitativa y cuantitativa en materias educativas y cultural e instrumentará planes y programas de interés nacional.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 21 tal como figura en el dictamen.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 22.

Sra. Rivas. — Señor presidente: para este artículo no hay modificaciones. Solicito que sea leído.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 22.

Sr. Prosecretario (Fassi). — *(Lee)*

Artículo 22. — El Ministerio de Cultura y Educación promoverá concertadamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación la adecuación de la estructura común del sistema educativo, la actualización de planes generales con objetivos y contenidos curriculares básicos y comunes con aportes que consideren las particularidades regionales, provinciales y de la escuela y su comunidad, a fin de establecer un marco de coherencia, unidad e integración educativa y cultural del país en un pleno respeto del federalismo.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 22, tal como figura en el dictamen.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el artículo 23.

Sra. Rivas. — Señor presidente: para este artículo hay modificaciones propuestas. Solicito que sea leído.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría será leído el artículo 23, con las modificaciones propuestas.

Sr. Prosecretario (Fassi). — *(Lee)*

Artículo 23. — Los servicios educativos de gestión privada que se transfieren quedan garantizados para que se sigan prestando con respeto de los principios de la libertad de enseñanza y los derechos emergentes de la normativa nacional sobre la materia.

Consecuentemente, podrán mantener sus características doctrinarias, modalidades curriculares y pedagógicas y el estilo ético formativo propios, en el ámbito de las jurisdicciones receptoras.

Estas mantendrán el régimen de aportes a la enseñanza privada en concordancia con el fijado en el orden nacional, en lo que hace a montos, proporciones y destino a los servicios transferidos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: entiendo que este artículo tiene una determinación subliminal que lesiona los derechos y la autonomía provinciales.

No quiero entrar en un debate. No es ésta mi intención ni corresponde hacerlo, esta noche.

Propongo reemplazar este artículo 23 por el siguiente texto: "Quedan transferidos los servicios educativos de gestión privada como así también los fondos para continuar con el régimen de subsidios vigentes."

El personal que se desempeñe como docente, técnico, administrativo y de servicios generales dentro de los servicios educativos de gestión privada mantendrán su estabilidad laboral, y los servicios asistenciales en idénticas condiciones que el personal de gestión pública".

Si nos hemos preocupado por la estabilidad de los docentes de servicios educativos estatales, ¿por qué no vamos a ocuparnos de la estabilidad de los docentes de los colegios privados?

Algunos hemos trabajado en colegios privados. Otros los conocen mejor porque tienen empresas educativas privadas. Todos sabemos muy bien de la inestabilidad de este personal.

No quiero que la transferencia de los servicios privados ponga en peligro la estabilidad de los docentes privados. Cuando la ley es pareja para todos no es rigurosa para nadie.

Mi propuesta es que se conserve la estabilidad para los estatales, que se supriman las referencias a las características doctrinarias —porque no corresponde— y simplemente dejar expresado que se aseguren los fondos transferidos, que es lo único que a las provincias les tiene que interesar.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: creo que se trata de dos cosas distintas.

Por un lado estamos transfiriendo a las provincias y municipalidades servicios que presta el Estado nacional. Por lo tanto, la estabilidad jurídica en igualdad de condiciones es obvia. Pero aquí estaríamos modificando la ley de contrato de trabajo y no es el objetivo de este proyecto de ley modificar las condiciones laborales.

Sra. Malharro de Torres. — Si me permite el señor presidente, deseo contestarle al señor senador.

Si esto violenta la ley de contrato de trabajo, ¿para qué subsidiamos a estas empresas de la educación? Con los fondos del pueblo se están pagando los subsidios, y resulta que no podemos defender la estabilidad de quienes trabajan dentro de estas empresas.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: aquí se plantea un problema importante. Si bien es

cierto que en el régimen nacional los docentes privados se encuentran enmarcados por las disposiciones de la ley 20.744 de contrato de trabajo —circunstancia por la cual tienen una estabilidad impropia, ya que pueden ser despedidos sin justa causa abonándoseles una indemnización—, hay provincias que como la mía cuentan con regímenes especiales para los docentes privados.

En Entre Ríos los colegios privados tienen libertad de elección del docente. Pero inmediatamente de ingresar en el establecimiento, adquiere la estabilidad según lo establece el Estatuto del Docente de la Provincia, se encuentra sujeto a la caja de jubilaciones provincial, cuenta con los servicios de la obra social correspondiente y puede concursar en los establecimientos públicos.

Es por esto importante que cuando se habla del régimen de estabilidad por lo menos se disponga que en los establecimientos privados que sean transferidos, si el docente ve mejorada jurídicamente su situación de estabilidad por parte de la legislación que lo va a regir, adquiera automáticamente por esta transferencia el estatuto propio de los provinciales. ¿Por qué, señor presidente? Porque esto no se va a poder resolver en el convenio. Observemos que el artículo 23 se refiere a políticas, a principios generales que atañen a la libertad de enseñanza. Pero no se refiere específicamente a ciertos y determinados *status*.

Hay provincias que tienen el mismo régimen de estabilidad que prevé la ley 20.744, pero hay otras, como es el caso de Entre Ríos, que tienen un régimen de estabilidad propio, entre cuyas disposiciones está la posibilidad de cesantía únicamente a través de sumario previo, con recursos judiciales, y sin indemnización, pero con incorporación inmediata, en caso de que la Justicia revoque el procedimiento realizado, con el pago de los salarios caídos. Es necesario entonces dejar perfectamente en claro esto, porque de lo contrario la Nación se encontraría con que no estará en condiciones de transferir estos establecimientos, ya que ello no podrá acordarse en el convenio respectivo.

Por lo menos, habrá que dejar establecido que si el régimen de la provincia receptora favorece al docente, éste sea el régimen que se adoptará.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Voy a hacer unas pocas reflexiones, señor presidente.

Me parece que este artículo fue redactado —no quiero involucrar a nadie en especial— por el director de algún servicio educativo privado, porque se ocupa grandemente de que los montos de los aportes a la enseñanza privada se mantengan en concordancia con los fijados en el orden nacional. No sé por qué no se aceptó la propuesta de la señora senadora por Mendoza, de que si se establece una garantía para los dueños de los colegios privados puede también establecerse una garantía para el personal, para quienes no son dueños de las escuelas privadas. De lo contrario va a haber dificultades y nos vamos a arrepentir.

Si los privados quieren mantenerse como tales, dejémoslos. Hay un derecho a la enseñanza garantizado por la Constitución. Siempre he estado en contra de los subsidios privados, porque solamente son utilizados por algunos. Ahora hay quienes han dejado de lado esos subsidios para aumentar sus cuotas mensuales, y dicen que actúan así porque hay absoluta libertad. Es cierto: hay absoluta libertad. Otros continúan con el subsidio de la Nación, pero bajo cuerda ponen una cuota que llaman "voluntaria", de modo que reciben tanto el subsidio como esta cuota que les entregan los alumnos. Podría darse el argumento de que el padre tiene el derecho de negarse a pagar esta cuota. Pero, ¿qué padre va a negarse a pagar esta cuota voluntaria, si está un poco apretado —discúlpennme la expresión— por la Dirección del colegio, que no va a mirar bien al alumno si su padre no hace ese aporte?

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: el pedido que ha hecho la señora senadora por Mendoza es doblemente justo, y además contribuye a la claridad del proyecto.

En primer lugar, si se transfieren los servicios educativos, es lógico que también se proceda igual con los fondos para continuar con el régimen de subsidios vigente. En segundo lugar, la iniciativa propuesta por la señora senadora Margarita Malharro de Torres tiende a afirmar la estabilidad laboral de los docentes privados, que es algo que atañe al interés general: es un acto de justicia social que estoy seguro compartirán todos los señores miembros de esta Cámara.

Por otra parte, tal como está redactado, el artículo 23 es redundante, porque independientemente de que lo diga o no la "normativa nacional sobre la materia", es decir, la legislación nacional sobre la materia, es aplicable. Aunque no hubiera sido ratificado por el artículo 23, la legislación nacional sería aplicable.

De manera que la propuesta de la señora senadora es clara además de justa, y tiende a darle un verdadero contenido social a este artículo.

Sr. Presidente (Menem). — Dado que no hay quórum se va a llamar para votar.

—Así se hace.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 23 con la redacción propuesta por la comisión.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 24.

Sr. Prosecretario (Fassi). — (*Lee*)

CAPÍTULO VII

Disposiciones transitorias

Artículo 24. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, podrá celebrar los actos jurídicos necesarios para el eficaz cumplimiento de la presente ley.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 25.

Sr. Prosecretario (Fassi). — (*Lee*)

Artículo 25. — Cuando por razones operativas alguna provincia lo requiera expresamente el Poder Ejecutivo nacional podrá atender por cuenta y orden de la misma los gastos emergentes de los servicios transferidos según el artículo 1º.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 26.

Sr. Prosecretario (Fassi). — (*Lee*)

Artículo 26. — Los participantes en el sistema de la ley 23.548, deberán presentar en el período legislativo de 1992 un proyecto de ley sustitutiva del régimen vigente de coparticipación federal de impuestos.

Sr. Posleman. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: no me opongo a este artículo. Simplemente quiero expresar que esto no pasa de ser una declaración que no obliga al Poder Ejecutivo ni a las provincias, que son los entes actuantes en la coparticipación.

pación. Cada uno tendrá la facultad de la iniciativa legislativa cuando lo crea conveniente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Creo que es muy importante que reafirmemos la necesidad de discutir el año próximo el tema de la coparticipación federal. De manera que esto no es solamente declarativo.

Es decisión del Poder Ejecutivo poner a consideración del Congreso un nuevo mecanismo de coparticipación que se haga efectivo a partir de 1993.

Por otra parte, solicito que se inserten en el Diario de Sesiones las palabras que pensaba pronunciar durante la consideración en general sobre el capítulo relacionado con el financiamiento y que por razones de brevedad preferí omitir en ese momento.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 26 tal como fue propuesto.

- La votación resulta afirmativa.
- El artículo 27 es de forma.

Sr. Presidente (Menem). — Queda sancionado el proyecto de ley.¹ Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Ruego a los señores senadores que permanezcan un minuto más en sus bancas para que podamos votar el pedido de inserción formulado por el señor senador por Salta.

- Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el pedido de inserción formulado por el señor senador por Salta.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se procederá en consecuencia.¹

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco, bloque justicialista.

Sr. Bittel. — En mi calidad de presidente de la Comisión de Acuerdos, solicito a los señores senadores que permanezcan en el recinto para que podamos pasar a sesión secreta y considerar el despacho que se ha omitido.

Sr. Presidente (Menem). — Ruego a los señores senadores que permanezcan en sus bancas para pasar enseguida a sesión secreta. Hay un solo pliego para considerar, de modo que el trámite será breve.

Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Jiménez Montilla. — Yo también quiero pedir la inserción en el Diario de Sesiones de las palabras que pensaba pronunciar durante la consideración en general sobre el proyecto de ley que acabamos de sancionar y que omití para no alargar el debate.

Sr. Presidente (Menem). — Ruego a los señores senadores que tomen asiento para que podamos considerar la solicitud efectuada.

- Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el pedido de inserción formulado por el señor senador por Tucumán.

- La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se procederá en consecuencia.¹

Queda levantada la sesión pública. Pasamos a sesión secreta.

- Son las 21 y 7.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

5

APENDICE

I

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1

Procedimiento penal oral

— El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 4520.

2

Profundización del acceso marítimo del puerto de Quequén

— El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 4529.

¹ Ver el Apéndice.

Transferencia de servicios educativos nacionales a las provincias

—El texto del proyecto de ley aprobado es el siguiente:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

De la transferencia

Artículo 1º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a transferir, a partir del 1º de enero de 1992, a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos, en las condiciones que prescribe esta ley.

Se exceptúan las escuelas superiores normales e institutos superiores, tanto estatales como privados, y la ENET N° 1 "Otto Krause", la Telescuela Técnica y los Centros de Recursos Humanos y Capacitación números 3, 8 y 10 de Capital Federal dependientes del CONET. Queda a criterio del Poder Ejecutivo nacional la oportunidad de transferir estos servicios en forma total o parcial previa garantía de financiamiento.

Art. 2º — Los requisitos específicos de las transferencias se establecerán mediante convenios a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y cada una de las jurisdicciones, en los que se acordará toda otra cuestión no prevista en la presente ley de acuerdo con las particularidades de cada jurisdicción. Dichos convenios serán referendados según la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones, por medio de las legislaturas provinciales.

Art. 3º — Las jurisdicciones receptoras, con el apoyo sostenido del Poder Ejecutivo nacional, deberán cumplir todos los derechos y obligaciones vigentes en materia educativa. El Estado nacional garantizará que los servicios transferidos sean prestados con óptima cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y equidad en todas las jurisdicciones.

Art. 4º — Las transferencias que se convengan se efectuarán sin otro cargo que los que establece la presente ley, e importarán la sucesión a título universal de los derechos y obligaciones.

CAPÍTULO II

De los bienes transferidos

Art. 5º — La transferencia de los servicios educativos a cada una de las jurisdicciones, comprenderá los bienes libres de todo gravamen actualmente afectados al Ministerio de Cultura y Educación y al Consejo Nacional de Educación Técnica, a saber:

- a) El dominio y todo otro derecho que el gobierno nacional tenga sobre los bienes inmuebles y sus accesorios, cualquiera sea el origen de sus derechos, con destino actual o previsto para estableci-

mientos educacionales y organismos de apoyo al sistema educativo;

- b) Los bienes muebles de todo tipo, incluyendo equipos, semovientes y elementos de uso y consumo regular;
- c) La documentación y todo otro antecedente relativo a los inmuebles y muebles transferidos que sean de utilidad a las jurisdicciones receptoras;
- d) Los contratos de locación de cosas, obras y servicios, sin perjuicio de las adecuaciones contractuales necesarias a fin de mantener la continuidad de los servicios.

Art. 6º — No serán transferidos los juicios pendientes ni las deudas que por cualquier causa hubiera contraído la Nación a la fecha de la transferencia.

Art. 7º — En el caso de que el dominio o la propiedad de los bienes inmuebles o muebles o derechos que se transfieran provengan de donaciones o de legados con cargo, la jurisdicción receptora garantizará su cumplimiento y los derechos de quienes resulten beneficiarios de tales cargos.

CAPÍTULO III

Del personal transferido

Art. 8º — El personal docente, técnico, administrativo y de servicios generales que se desempeñe en los servicios que se transfieren quedará incorporado a la administración provincial o municipal en su caso, de conformidad con las siguientes bases:

- a) Identidad o equivalencia en la función, jerarquía y situación de revista en que se encontrare a la fecha de la transferencia;
- b) Retribución por todo concepto no inferior a la que se perciba al momento de la transferencia y equiparación a la escala salarial jurisdiccional durante 1992;
- c) Reconocimiento de la antigüedad en la carrera y en el cargo, ya sea en carácter de titular, interino o suplente;
- d) Reconocimiento a la estabilidad en el cargo u horas cátedra que desempeñe al tiempo de la transferencia cuando revistiere en calidad de titular, interino o suplente según la normativa vigente en cada jurisdicción;
- e) Reconocimiento de títulos y antecedentes profesionales valorables para concurso de la carrera docente en equivalencia de condiciones con las vigentes para los docentes de la jurisdicción receptora.

Art. 9º — Las jurisdicciones podrán convenir mecanismos para facilitar al personal transferido optar por continuar en la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), en cuyo caso el gobierno de la jurisdicción deberá actuar como agente de retención de los correspondientes aportes, o incorporarse a la obra social de la jurisdicción receptora.

Art. 10. — A los efectos previsionales, las jurisdicciones receptoras reconocerán los servicios prestados por el personal en el orden nacional. Los docentes transferidos que no reúnan los requisitos exigidos en la jurisdicción receptora, podrán continuar efectuando

aportes al sistema nacional de previsión; las jurisdicciones serán agentes de retención de los mencionados aportes.

Art. 11. — El personal docente transferido continuará en la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente; el gobierno de la jurisdicción receptora actuará como agente de retención de los aportes.

Art. 12. — Las cuestiones disciplinarias referidas al personal transferido suscitadas hasta el momento de efectivizarse la transferencia, serán resueltas según la normativa vigente al momento de ocurrir los hechos que las motivaron y en la jurisdicción de origen en un plazo no mayor de un año con posterioridad a la firma del convenio; las jurisdicciones receptoras aplicarán las sanciones y/o medidas que la jurisdicción de origen hubiera resuelto.

Art. 13. — Los concursos de docentes a ser transferidos, así como también los procedimientos de traslados, titularizaciones y jubilaciones, pendientes de resolución que pudieren existir al momento de promulgarse esta ley, deberán ser resueltos según la normativa de origen con el alcance y en tiempos y modos que establezcan los respectivos convenios bilaterales.

CAPÍTULO IV

Del financiamiento

Art. 14. — A partir del 1º de enero de 1992 y hasta tanto se modifique la ley 23.548 la Secretaría de Hacienda de la Nación retendrá de la participación correspondiente a las provincias en el régimen de la citada ley, previamente a la distribución secundaria, un importe equivalente al monto total, que se incluye en planilla anexa número 1 A, con detalle para cada jurisdicción, con destino al financiamiento de los servicios educativos que se transfieren por la presente ley y los correspondientes al costo de servicios de hospitales e institutos nacionales, políticas sociales comunitarias y Programa Social Nutricional a transferir a las provincias según se convenga oportunamente.

Dicha retención será operativa en la medida que el incremento de la recaudación de los gravámenes a que se refiere la ley 23.548 para 1992 respecto del promedio mensual anualizado del período abril-diciembre de 1991 sea superior al monto mencionado en el párrafo anterior.

Art. 15. — Cuando el monto mensual recaudado no alcance a cubrir el nivel promedio mensual del período abril-diciembre de 1991, el gobierno nacional cubrirá totalmente y en forma automática el costo mensual de los servicios transferidos.

Si al cierre de cada mes lo recaudado fuere superior al nivel promedio abril-diciembre de 1991 pero no alcanzare a cubrir el costo de los servicios el gobierno nacional financiará automáticamente la diferencia.

Art. 16. — Al momento de efectivizarse la transferencia de los servicios prevista en el artículo 14 se transferirán en las proporciones correspondientes los recursos afectados según el párrafo primero de dicho artículo a la respectiva provincia y por hasta los montos mencionados en el mismo.

Art. 17. — El Poder Ejecutivo nacional deberá fijar el marco general y los criterios particulares a seguir a efectos de brindar un tratamiento equivalente a lo dis-

puesto por los artículos 14, 15 y 16 de la presente, a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con anterioridad a la firma del convenio previsto en el artículo 2º de esta ley. Ello, sin afectar la participación de las provincias según la ley 23.548.

Art. 18. — Las obras públicas que se encuentren en ejecución en los servicios a transferir, serán continuadas y finalizadas por la Nación. A su término dichos inmuebles serán transferidos a la jurisdicción en los términos de la presente ley.

Art. 19. — El Poder Ejecutivo nacional asignará un monto global para reparaciones de los edificios transferidos cuyo estado de conservación o antigüedad afecte el desenvolvimiento de los servicios educativos. Los montos serán acordados en los respectivos convenios bilaterales.

CAPÍTULO V

Aspectos pedagógicos

Art. 20. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, ejecutará las políticas y estrategias del Sistema Educativo Nacional, en consulta permanente con el Consejo Federal de Cultura y Educación, y coordinará, compatibilizará y evaluará el funcionamiento interjurisdiccional.

Art. 21. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, en ejercicio de su competencia, realizará el análisis, evaluación y seguimiento de la situación educativa; de la consistencia, congruencia y calidad educativas de los planes y programas en la materia en relación con las prioridades establecidas; brindará asistencia técnica y financiera para el desarrollo de estrategias y programas educativos; atenderá y gestionará los asuntos de naturaleza internacional que se relacionen con la educación y la cultura; determinará los requerimientos y condiciones para el reconocimiento de títulos y certificados nacionales y extranjeros; organizará y administrará un sistema de información cualitativa y cuantitativa en materias educativa y cultural e instrumentará planes y programas de interés nacional.

Art. 22. — El Ministerio de Cultura y Educación promoverá concertadamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación la adecuación de la estructura común del sistema educativo, la actualización de planes generales con objetivos y contenidos curriculares básicos y comunes con aportes que consideren las particularidades regionales, provinciales y de la escuela y su comunidad, a fin de establecer un marco de coherencia, unidad e integración educativa y cultural del país en un pleno respeto del federalismo.

CAPÍTULO VI

De la enseñanza privada

Art. 23. — Los servicios educativos de gestión privada que se transfieren quedan garantizados para que se sigan prestando con respeto de los principios de la libertad de enseñanza y los derechos emergentes de la normativa nacional sobre la materia.

Consecuentemente, podrán mantener sus características doctrinarias, modalidades curriculares y pedagó-

gicas y el estilo ético formativo propios, en el ámbito de las jurisdicciones receptoras.

Estas mantendrán el régimen de aportes a la enseñanza privada en concordancia con el fijado en el orden nacional, en lo que hace a montos, proporciones y destino a los servicios transferidos.

CAPÍTULO VII

Disposiciones transitorias

Art. 24. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, podrá celebrar los

actos jurídicos necesarios para el eficaz cumplimiento de la presente ley.

Art. 25. — Cuando por razones operativas alguna provincia lo requiera expresamente el Poder Ejecutivo nacional podrá atender por cuenta y orden de la misma los gastos emergentes de los servicios transferidos según el artículo 1º.

Art. 26. — Los participantes en el sistema de la ley 23.548, deberán presentar en el período legislativo de 1992 un proyecto de ley sustitutiva del régimen vigente de coparticipación federal de impuestos.

Art. 27. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PLANILLA ANEXA

Nº 1 A

— en millones de \$ de 1992 —

Provincia	Transf. de Cultura y Educación	Proscoco	Programas nacionales			Total
			Prosonu	Hospi- tales	Menor y filia.	
Buenos Aires	269.1	18.3	26.3	40.2	7.7	361.6
Catamarca	11.6	2.6	1.6			15.8
Córdoba	67.6	8.2	5.3			81.1
Corrientes	19.5	3.5	5.4			28.4
Chaco	12.5	4.6	8.1			25.2
Chubut	19.6	1.1	1.8			22.5
Entre Ríos	37.4	4.5	3.7	2.5	0.4	48.5
Formosa	8.0	3.5	3.8			15.3
Jujuy	16.9	2.7	4.6			24.2
La Pampa	8.9	1.8	0.7			11.4
La Rioja	12.5	1.9	1.2			15.6
Mendoza	32.9	3.7	4.0			40.6
Misiones	14.2	2.9	6.3			23.4
Neuquén	7.1	1.6	1.9			10.6
Río Negro	7.1	2.5	3.2			12.8
Salta	20.5	3.6	6.3			30.4
San Juan	17.8	3.4	2.1			23.3
San Luis	14.2	2.0	1.1			17.3
Santa Cruz	4.4	1.1	0.4			5.9
Santa Fe	66.7	8.3	6.7			81.7
Santiago del Estero	14.2	3.7	6.0			23.9
Tucumán	28.5	4.5	5.7			38.7
TOTAL	711.2	90.0	106.2	42.7	8.1	958.2

Nº 1 B

MCBA	173.5	2.2		68.0	5.7	249.4
Tierra del Fuego	5.3	0.2	0.1			5.6

II

INSERCIONES

1

Solicitada por el señor senador Romero

Proyecto de ley sobre transferencia de servicios educativos a las provincias

En relación con el proyecto de ley que estamos considerando, me referiré a los aspectos del financiamiento tratados en el capítulo IV, desde el artículo 14 al 19,

La idea general en la que se apoya el proyecto parte de la transformación que se ha venido operando en la captación y distribución de los recursos del sector público argentino en los dos últimos años.

Para ello debe tenerse presente que a mediados de 1989 casi la mitad de los recursos del gobierno nacional

provenían de los tributos aduaneros, que no se coparticipan, y que el financiamiento con el impuesto inflacionario, del que tampoco participaban las provincias, no obstante las fluctuaciones, se puede estimar que alcanzaba al 30% de los recursos.

A partir de fines de 1989, se inicia un doble proceso. Por el lado del sistema tributario nacional formado por los impuestos incluidos en el régimen de coparticipación federal se realizan sucesivas modificaciones a la legislación que, entre lo más importante, amplían la base del IVA a todos los bienes, en primer término, y luego a los servicios y establecen el impuesto sobre los activos, al tiempo que se va mejorando paulatinamente la administración de la recaudación.

Por el lado de los tributos aduaneros se impulsa una tendencia inversa. A principios de 1990 comienza el proceso gradual de rebaja de los derechos de exportación hasta su total eliminación en el curso del presente año. Del mismo modo se procede con una significativa reducción de los aranceles de importación y la reciente eliminación de la tasa de estadística para las exportaciones y de impuestos que gravaban los fletes de importación y exportación.

Simultáneamente se decide abandonar definitivamente el financiamiento con fondos provenientes de la emisión monetaria, lo que se refuerza con la Ley de Convertibilidad y se reafirma con el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central sancionado por este Honorable Senado la semana pasada.

En los hechos, estas transformaciones se han traducido en una más racional distribución de los recursos del conjunto del sector público argentino, dando a las provincias una mayor proporción de fondos de libre disponibilidad.

Naturalmente, esta racionalización en la asignación de los recursos debe ir acompañada de una adecuación en la distribución de funciones entre los distintos niveles del sector público —nacional, provincial y municipal—, en una tendencia hacia la descentralización que acerque lo más posible al responsable de la prestación del servicio y el usuario.

En definitiva, de lo que se trata es de hacer más eficiente la asignación de los recursos y el control sobre la prestación de los servicios.

El contenido del capítulo sobre el financiamiento incluido en el proyecto de ley que estamos considerando, contempla esta nueva realidad y trata de adecuar la distribución de los recursos a los efectos de la transferencia de servicios educativos a las provincias, juntamente con servicios hospitalarios y programas sociales.

El artículo 14 establece, con vigencia a partir del 1º de enero de 1992, una modificación en la distribución secundaria de los recursos comprendidos en la coparticipación federal fijada por la ley 23.548, que regirá hasta que se modifique la ley 23.548.

Para ello se ha tomado como base la recaudación estimada para el período abril-diciembre de 1991 anualizada (por estar escasamente influida por la inflación), que se ubica en el orden de 13.100 millones de dólares, y la recaudación estimada para 1992 en el orden de 15.700 millones de dólares.

Según este último monto, la participación de las provincias en el producido de los impuestos coparticipados para 1992 será de 8.900 millones de dólares, o sea algo más del 20% en relación con 1991. Conforme al artículo que estamos considerando, para la distribución de esta masa de recursos se parte de la base de un monto igual al estimado para 1991, o sea aproximadamente 7.356 millones de dólares; que se continuará repartiendo automáticamente según el sistema de la ley 23.548. A partir de esto, la recaudación excedente se distribuirá a cada una de las provincias en proporción al costo de los servicios y programas transferidos, hasta que, según el artículo 16, la recaudación alcance el monto total de los costos, o sea, la suma de 958 millones de dólares, según se detalla en la planilla anexa al texto del proyecto. Todo excedente posterior, estimado en 586 millones de dólares, se distribuirá según el régimen de la ley 23.548.

Mientras no se formalicen los convenios de transferencias, la Nación, por intermedio de la Secretaría de Hacienda, retendrá de la parte que corresponda a las provincias las sumas correspondientes a los servicios objeto de transferencia, siempre que la recaudación supere el monto estimado para 1991 antes comentado, con lo cual indirectamente se asegura a las provincias; para 1992, un financiamiento por lo menos igual al de 1991.

El contenido del artículo 15 opera a manera de cláusula de garantía, según la cual la Nación, mensualmente y en forma total y automática, cubrirá los faltantes de recursos para cubrir los costos de los servicios transferidos en la medida en que no se produzcan los excedentes estimados.

Por el artículo 17 el Poder Ejecutivo nacional deberá fijar, previamente a la firma de los convenios, el marco general y los criterios particulares para dar un tratamiento financiero equivalente al antes descrito a las transferencias que se realicen a la provincia de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el artículo 18 la Nación se obliga a continuar y concluir las obras en curso destinadas a los servicios transferidos y a traspasarlas, luego, a las distintas jurisdicciones.

Por el artículo 19 se faculta al Poder Ejecutivo nacional a asignar un monto global para reparaciones de los edificios transferidos que no estén en condiciones adecuadas para la prestación de los servicios.

La reestructuración de la distribución de los recursos del sector público argentino antes descrita, la transferencia de los servicios que estamos considerando, la reestructuración y redimensionamiento de la organización del Estado nacional y, en general, los cambios que se están operando en los fines y las funciones del Estado en sus distintos niveles y en el orden regional y local, muestran una situación muy distinta de la vigente al momento de la sanción de la ley 23.548 que implantó el actual régimen de coparticipación federal. Por eso se hace necesario replantear en forma inmediata la asignación de los recursos del conjunto del sector público, para distribuir el financiamiento de forma que se asegure una prestación de los servicios públicos en la forma más equitativa que sea posible a todos los ciudadanos.

Por tal razón, el proyecto trata de impulsar, a través del artículo 26, una acción conjunta de la Nación y las provincias para lograr un acuerdo federal sobre la distribución de los recursos que responda a la nueva realidad.

2

Solicitada por el señor senador Jiménez Montilla

Señor presidente:

El tratamiento de un tema de la trascendencia del proyecto de ley de transferencia de servicios educativos nacionales, provoca sin lugar a dudas una convocatoria a debates pedagógicos, por cuanto su intencionalidad no es otra que la de mejorar la calidad y pertinencia de la educación.

Si educar es encaminar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales del niño o del joven, por medio de preceptos, ejemplos, etcétera, no puede existir vacilación alguna acerca de que el proyecto en cuestión nos obliga a prever las proyecciones consecuenciales futuras que esta transferencia pueda llegar a tener en la conformación de la intelectualidad del venidero ser nacional: hombre social, hombre político.

Con gran satisfacción observo que la cuestión a tratar ha prendido en la totalidad de las conciencias políticas y públicas, aprobando unánimemente la transferencia propiamente dicha, haciéndose hincapié con preponderancia en el presupuesto adicional que supondría la nueva estructura educacional, a lo que el Estado ha ofrecido solución, cuando su ministro de Economía afirma que la Nación no desgarnecerá el presupuesto provincial, porque éstas recibirán un aumento acorde con los gastos que provoquen los servicios de educación a transferir, y lo será en concepto de ampliación de la cuota de participación federal, con lo que se habría contemplado el aspecto económico-financiero que conlleva la nueva infraestructura pedagógica y que el proyecto que nos ocupa ha previsto en su capítulo IV, regulando su financiamiento.

Cabe preguntarse ¿la nueva jurisdicción provincial estará capacitada para recepcionar esta transferencia educacional? Contesto que las provincias tienen la madurez técnica, pedagógica y administrativa suficiente, para hacerse cargo de las escuelas, haciendo desaparecer el riesgo acerca de la calidad de la educación, por cuanto no sólo elevará su nivel sino que también contribuirá a mejorar los salarios docentes.

Al apoyar la sanción del proyecto de transferencia educativa lo hago teniendo en especial consideración el derecho constitucional de que goza todo habitante de la Nación a enseñar y aprender —reconocido en el artículo 14 de nuestra Carta Magna— y lo menciono, porque a nuestros representados les debemos brindar todas aquellas circunstancias fácticas que posibiliten un mejor sistema educativo nacional, y qué mejor sistema que el que propone en el proyecto auspiciado.

Señor presidente, en cuanto al proyecto propiamente dicho, observamos que el mismo consta de seis capítulos. El primero decreta la decisión política de transferir gradualmente y en forma total o parcial los servicios

Ese acuerdo federal necesariamente deberá surgir de la discusión sobre el diseño de la organización política de la Nación, discusión que a su vez deberá dar por resultado un modelo que, a partir de bases estables, proyecte el futuro integrado del país.

educativos administrados por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos. También alude a la existencia de convenios bilaterales, a respetar la normativa vigente en materia educativa y la garantía de la Nación para preservar en la oferta educativa la calidad, cantidad y equidad.

El capítulo segundo detalla e identifica los bienes transferidos que lo serán libres de todo gravamen, estableciéndose que aquellos serán transferidos sin deudas ni juicios pendientes.

El capítulo tercero establece las bases para la transferencia del personal docente, técnico y otros, en lo que respecta a la función, retribuciones, reconocimiento de antigüedad, estabilidad y antecedentes profesionales, obra social, jubilación, cuestiones disciplinarias y concursos y titularizaciones en trámite.

El capítulo cuarto prevé los recursos para el financiamiento de los servicios transferidos.

Dispone que los recursos para las provincias deben ser suficientes para el financiamiento integral de los servicios transferidos y que el posible incremento de los mismos por mayores costos será financiado por el Poder Ejecutivo nacional, así como la manutención del subsidio a los establecimientos privados, la continuidad de las obras públicas en ejecución y la posibilidad de asignar parte de la Nación un monto global para reparaciones de edificios.

El capítulo quinto define los aspectos pedagógicos estableciendo que a través del Ministerio de Cultura y Educación se delinearán las políticas y estrategias del sistema educativo nacional, en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación y coordinará, compatibilizará y evaluará el funcionamiento interjurisdiccional, y resguardará la coherencia, unidad e integración educativa y cultural del país en un pleno respeto del federalismo.

El capítulo sexto establece los principios de libertad de enseñanza y se garantizan los servicios de gestión privada, pero éstos podrán mantener sus características propias, es decir, sus modalidades pedagógicas, doctrinarias, etcétera, y no se les modificarán los aportes del orden nacional.

Y por último el capítulo séptimo faculta al Ministerio de Cultura y Educación para celebrar los actos jurídicos necesarios para el eficaz cumplimiento del proyecto analizado.

Con la generalización primeramente explicitada y la síntesis del contenido expuesta, resulta obvio particularizar por qué el que habla solicita a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto examinado.